

# TRANSFORMACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA\*

Juan Carlos Torre

## PRIMERA PARTE

### UN GRAN LABORATORIO

Si con la mirada puesta en la Argentina del Centenario dejamos correr el tiempo y nos desplazamos hacia los años treinta del siglo XX, ¿qué encontramos? Un país que ha logrado procezar —con un éxito dudosamente imaginable en 1910— el formidable desafío de absorber las grandes masas de inmigrantes extranjeros que habían arribado a su territorio a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Ese logro es a todas luces extraordinario. Su singularidad se advierte al ubicarlo en relación con los países de gran inmigración, pues ningún otro había experimentado un *shock* demográfico de magnitudes comparables.

Durante el período de los grandes desplazamientos de población de Europa al continente americano, la Argentina fue —después de los Estados Unidos— el país que más inmigrantes recibió en términos absolutos. Entre 1857 y 1914, a los Estados Unidos llegaron cerca de 27 millones de inmigrantes y, a la Argentina, 4,6 millones; los otros destinos fueron Canadá, con alrededor de 4 millones, y Brasil, con unos 3,3 millones. Ciertamente, las cifras de la Argentina son sustancialmente menores que las de los Estados Unidos, pero su impacto tuvo un alcance mayor. En la década de 1880, cuando dio comienzo la ola de inmigración masiva al país, entraron 220 inmigrantes por cada 1.000 habitantes; en la siguiente, fueron 163, y en los primeros diez años del siglo XX, casi 300. Estos números —que triplican los de los Estados Unidos en cada una de esas décadas— ilustran el aspecto que nos interesa

\* Agradezco los comentarios y sugerencias de Silvia Sigal, Lila Caimari, Fernando Devoto y Pablo Gerchunoff a versiones preliminares de este ensayo.

substanciar el mayor peso relativo del flujo inmigratorio respecto de la población existente en nuestro país. El contraste salta de inmediato a la vista mediante los promedios nacionales. En 1890, los inmigrantes eran el 14,7 por ciento de la población total de los Estados Unidos, mientras que, en una fecha cercana, en 1895, representaban el 25,5 por ciento del mismo universo en la Argentina. Entrando en el nuevo siglo, el contraste se hizo más amplia-mente. En 1910 la proporción de extranjeros sobre la población de los Estados Unidos —14,5 por ciento— no varió sustancialmente; en cambio, según el registro del censo de 1914, llegó a alcanzar la notable cifra del 30 por ciento del total de la población que habitaba en la Argentina.

Al descomponer ese 30 por ciento del promedio nacional de acuerdo con su distribución en el territorio del país, obtenemos una mejor apreciación del impacto de la inmigración. En el área geográfica epicentro de la vasta transformación económica de la Argentina —la ciudad de Buenos Aires y las provincias del Litoral— estaba localizado el 79 por ciento de la inmigración ultramarina. Su proporción sobre la población total de la ciudad capital era del 50 por ciento, y del 35 por ciento en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. También era significativo el peso de los extranjeros en Córdoba, cuya zona sur participaba asimismo de la expansión agrícola, con un 30 por ciento sobre la población total; en Mendoza, donde había despuntado la producción de vinos, y en otro distrito agrícola más periférico, el territorio de La Pampa, donde representaban, respectivamente, el 29 por ciento y el 36 por ciento del total de la población, respectivamente, en 1914. Agregando estas provincias a las anteriores, tenemos que en este conjunto reside el 91,5 por ciento de los inmigrantes llegados de Europa. Como se desprende de los datos, esa era una presencia desigual, más bien escasa en las provincias de antigua población, como las localizadas en el Noroeste. Entre tanto, la incidencia de los extranjeros en las zonas donde estaban concentrados era todavía mayor porque una gran proporción de lo que el censo contabilizaba como población nativa, estaba compuesta por hijos de los inmigrantes radicados en el país al cabo de las sucesivas oleadas migratorias.

La decisiva gravitación de los inmigrantes y sus descendientes sobre la estructura demográfica fue una de las razones que hicieron

de la Argentina un caso singular en la época. Las otras razones son conocidas: de ser un país importador de alimentos, en treinta años había puesto las bases de una explotación agropecuaria altamente competitiva en los mercados del mundo; en un lapso relativamente corto, la espectacular metamorfosis experimentada por su capital había dejado atrás a la Buenos Aires de mediados del siglo XIX, la Gran Aldea, para convertirse en la París de Sudamérica, solo superada en número de habitantes por Nueva York, en este lado del Atlántico. La economía floreciente y la ciudad moderna galvanizaron el espíritu de autocelebración con que la élite dirigente organizó los festejos de los cien años de la Revolución de Mayo. El carácter más cosmopolita de la población le proporcionó, en cambio, un motivo de preocupación: el aluvión de inmigrantes ultramarinos se tradujo en un *shock* cultural que hizo temer por la solidez de la comunidad nacional desde cuyo vértice conducía la marcha del progreso argentino. En el momento de recoger los resultados de su política migratoria, se encontraron ante una inquietante constatación: esa multitud de extranjeros en el censo neurálgico de la modernización del país, con sus colectividades étnicas, sus dialectos, su manifiesta obsesión por hacer dinero y regresar a su patria, entrañaba el riesgo cierto de un debilitamiento de la lealtad nacional. La favorable recepción que muchos de ellos dispensaban a la prédica de los agitadores anarquistas tornaba este peligro en una amenaza más ominosa aún.

Las tendencias de la trayectoria demográfica de la Argentina justificaban esos temores. Los 1,7 millones de habitantes de 1869, el año del primer censo, se transformaron en 1914 en unos 7,9 millones; entre una y otra fecha, la población había crecido cuatro veces y media, y de ese crecimiento, el 52 por ciento era tributario del flujo neto de los inmigrantes. Si distinguimos dentro de la población de origen nativo el crecimiento vegetativo atribuible a los hijos de los inmigrantes y lo estimamos en un 18 por ciento, tenemos que, sumados ambos porcentajes, la contribución de los extranjeros y sus descendientes al poblamiento del territorio nacional alcanzaba proporciones de inusual magnitud. Proyectadas, las tendencias observables en la primera década del siglo XX equivalían al inexorable achicamiento del núcleo de la población más antigua y en consecuencia, a un reemplazo en gran escala de la antigua una demográfica del país. En verdad, este desenlace había estado

contemplados en el lanzamiento de la política inmigratoria. La evaluación de las nuevas fuentes de la granja receptiva era deficiente de recursos humanos que la oferta existente no estaba en condiciones de satisfacer. No solo porque era exigua en términos relativos, también porque, a juicio de la elite dirigente, los que la componían —los trabajadores criollos de la campaña— carecían de los hábitos de trabajo y el afán de superación que demandaba una economía agropecuaria más moderna, más capitalista. Esta coincidencia de necesidades y prejuicios abrió las puertas de la Argentina con un propósito: atraer a las poblaciones que las transformaciones de Europa empujaban fuera de sus fronteras para rehacer de cuajo, a partir de ellas y de su esperado aporte civilizador, la composición sociocultural del país.

A la vista del resultado —la formación de una abigarrada y polifónica sociedad en la zona central del país—, buena parte de la elite dirigente retrocedió con aprensión ante su propia obra. Una extendida alarma sustituyó al confiado optimismo que había dado impulso a la política inmigratoria e instaló con urgencia y en un lugar prioritario la cuestión nacional en la agenda pública de los tiempos del Centenario. Unas dos décadas más tarde, ese lugar ya no sería el mismo. A esto contribuyó, sin duda, la drástica disminución de las corrientes migratorias provenientes de Europa después de 1930, un fenómeno generalizado entre los países de América; perdió, pues, sustento la proyección inquietante de un país con una persistente y renovada presencia de extranjeros. Para entonces, además, la preocupación por la suerte de las lealtades nacionales también se había ido diluyendo paulatinamente. En ese gran laboratorio que fue la Argentina de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, las dosis combinadas de políticas de nacionalización cultural y de oportunidades de progreso económico amalgamaron y dieron unidad con el correr de los años a un cuerpo social hecho de elementos diversos y contrastantes. Retomando la perspectiva comparada, destaquemos que la eficacia de esa operación de síntesis se hace visible al cotejarla con la experiencia de los Estados Unidos. Como sostuvo Gino Germani, no se formaron aquí subculturas étnicas duraderas, tal como sucedió en el País del Norte, donde el origen nacional se conservó como parte de la identidad. En la Argentina no hubo ni hay italoargentinos, hispanoargentinos o polacoargentinos, como

existen italoamericanos, irlandamericanos en los Estados Unidos aun después de dos o tres generaciones. Por cierto, el itinerario seguido hasta ese punto de llegada no excluyó el uso de la coerción ni tampoco estuvo exento de conflictos, como era previsible debido a la naturaleza misma del experimento en curso: la construcción de una identidad nacional sobre el telón de fondo de una estructura demográfica envuelta en un acelerado proceso de cambio.

I

Para recorrer los avatares de ese itinerario, volvamos la atención sobre las corrientes emigratorias que partieron de los puertos de Europa y atravesaron el Atlántico. Quienes llegaban a América consideraban con frecuencia que el viaje era el traslado de un trabajo a otro, más que de una nación a otra. Su objetivo era trabajar duro y reunir ahorros, primero, para enviar ayuda económica a sus familias y, después, para retornar e invertirlos en sus lugares de origen, comprando tierras o edificando una casa. Esa finalidad instrumental permite dar cuenta de los rasgos principales de la experiencia emigratoria. En primer lugar, su perfil demográfico: los hombres superaban a las mujeres y a los niños. En sus grandes números, no era una emigración de familias: los que bajaban de los barcos eran mayormente hombres jóvenes en busca de mejores trabajos y más ingresos. En segundo lugar, su alta sensibilidad a los vaivenes de la situación económica en los países de destino. Cuando la coyuntura era propicia, la migración aumentaba; en los malos tiempos, sus volúmenes descendían en forma abrupta. En tercer lugar, tenemos los ciclos de ida y vuelta de los desplazamientos de población. Paralelamente a los que venían, unos por primera vez, otros reincidiendo por segunda o tercera vez en la aventura inmigratoria, estaban aquellos que hacían el camino inverso y la daban por concluida, más a menudo con sus aspiraciones satisfechas que bajo el peso del fracaso. Para los vastos contingentes que el proyecto emigratorio ponía en movimiento, América era generalmente un sitio transitorio. Y a él arribaban llevando en su modesto equipaje sus costumbres y usos étnicos, que les brindaban abrigo y sostén mientras probaban suerte en el Nuevo Mundo: no erraríamos si afirmamos que

no estaba en sus expectativas desprenderse de ellos y echar nuevas raíces.

De este retrato de los inmigrantes ultramarinos es posible extraer una conclusión. El éxito de la misión civilizadora que la elite dirigente de la Argentina había asignado a la inmigración enfrentaba un primer obstáculo: los planes de vida de esa masa de extranjeros que desembarcaba en el puerto de Buenos Aires estaban radicados más en sus países de origen que allí adonde emprendían su aventura inmigratoria. Su condición de "aves de paso" era poco compatible con el propósito de hacer de ellos el agente de una mutación duradera del tejido social y cultural de la población local. Este resultó ser, con todo, el obstáculo menos difícil de superar. La rápida expansión del país en el medio siglo anterior al estallido de la Primera Guerra Mundial contribuyó a ello al ofrecer suficientes razones para que muchos de los que venían con un programa de retorno terminaran optando por quedarse, trajeran a sus familias o formaran otras nuevas. De los 4,6 millones que llegaron entre 1857 y 1914, poco más de la mitad se estableció en forma permanente. Juzgada comparativamente, esa fue una proporción algo más elevada entre los países de fuerte inmigración. Más complejo resultó, en cambio, el problema creado por los orígenes nacionales de los principales flujos migratorios llegados al país. Al igual que tantas otras en las regiones de la periferia, la elite dirigente de la Argentina concibió la ruta hacia el progreso como un proceso de transplante cultural: para salir del atraso era preciso importar valores y prácticas que exhibían las naciones más adelantadas del orbe capitalista. A mediados del siglo XIX, el faro de la modernidad estaba localizado en Europa, más específicamente en los países de la Europa del Norte. Como es comprensible, los inspiradores de la ideología pro inmigratoria —Juan Bautista Alberdi el primero— apostaron por atraer a los emigrantes de esos países no solo para proveer de mano de obra idónea a la economía en crecimiento, sino también para implantar, por su intermedio, los hábitos de la sociabilidad moderna hacia la que aspiraban encaminar a su propio país. En el balance final, fue una apuesta fracasada. La abrumadora mayoría de los emigrantes que recibió la Argentina provino de la Europa del Sur, más arcaica y postergada.

Este desenlace tan distante del propósito original tiene una primera explicación: la Argentina ganó prominencia como destino de las corrientes migratorias de Europa cuando disminuía el flujo de los países del Norte y se incrementaba el de los países del Sur y el Este. Entre 1856 y 1860, el grueso de los emigrantes que atravesaban el Atlántico se reclutaba en los países del Norte: Gran Bretaña, Alemania, Francia, Suecia, Noruega, aportaron en esos años el 90 por ciento del total de emigrantes. Desde entonces, su participación experimentó una sostenida declinación, con 80 por ciento en 1871-1875, 70 por ciento en 1881-1885, para ubicarse en 1891-1895 por debajo del 45 por ciento. Por su parte, la emigración desde los países del Sur y el Este siguió la trayectoria opuesta. Si de Italia, España, Portugal, Austria-Hungría y Rusia solo emigraba el 8,2 por ciento del total registrado en 1856-1860, unos treinta años después, hacia 1891-1895, ese porcentaje ya era de 52 por ciento; el pico se alcanzaría durante el quinquenio 1906 y 1910, con 68 por ciento del total. La parábola descrita por las corrientes migratorias acompañó la marcha de la revolución capitalista del siglo XIX en el continente europeo. Primero en el Norte y, en forma más tardía, en el Sur y el Este, los efectos de la transición a una agricultura comercial, las primeras fases de la industrialización y la incorporación a un mercado ampliado impulsaron los desplazamientos de población dentro de los propios países y también fuera de ellos.

El aumento de la importancia de la Argentina como país de destino coincidió precisamente con ese cambio en las tendencias de la emigración europea. Hasta la década de 1870, los Estados Unidos eran, por lejos, el principal receptor; de allí en adelante, empezaron a abrirse nuevos horizontes y entre ellos sobresalió nuestro país. En 1856-1860, había recibido el 2,5 por ciento del conjunto de la emigración europea, pero para 1886-1890, su participación se elevó al 15 por ciento y en 1906-1910 fue de casi 18 por ciento. No sorprende, por lo tanto, que al integrarse de lleno al circuito emigratorio, quienes aprovecharon su flamante prosperidad proviniesen mayoritariamente de Europa del Sur. La distribución por país de origen de los que arribaron entre 1871 y 1914 es elocuente: en los primeros lugares, Italia (47 por ciento) y España (32 por ciento), y, a una considerable distancia, Francia (5 por ciento); Rusia y Polonia, de origen judío en gran parte (3 por

cuando). Italia (3 por ciento); Austria-Hungría (2 por ciento); Gran Bretaña, incluyendo Irlanda (1 por ciento), y una serie de otros (1 por ciento). La política de puertas abiertas que acompañó a la empresa modernizadora de la elite dirigente conoció sus frutos, en definitiva, entre los emigrantes que en la conjuntura de la época estaban disponibles.

Para completar el argumento, señalemos que el predominio de los europeos del Sur no fue solo la consecuencia de un creciente participación en la oferta emigratoria. Entre la disposición a emigrar y la elección de un país de destino, hay un proceso intermedio condensado en la pregunta que se hacían en la víspera del viaje: ¿Dónde estaré mejor, en los Estados Unidos, en la Argentina, en Brasil? Ese interrogante coloca en primer plano, como bien ha subrayado Fernando Devoto, el papel central de la información y, junto con él, el de las redes sociales que servían de puente entre ambos lados del Atlántico. Quienes partían de Europa generalmente sabían adónde ir y cómo hacerlo porque recibían información y asistencia por parte de aquellos que los habían precedido. En la Argentina, los candidatos para brindar esos servicios ya eran numerosos en torno de 1870, en su mayor parte italianos (de Piamonte, Lombardía y Liguria) y españoles (de Galicia y el País Vasco). La presencia de estas inmigraciones tempranas tuvo influencia sobre la composición de la oleada de extranjeros que afluyó diez años más tarde y se prolongó hasta la Primera Guerra Mundial. La convocatoria lanzada por la elite dirigente al aporte europeo se plasmó ciertamente en políticas públicas, pero la legislación favorable y las campañas de propaganda gravitaron menos. Los verdaderos agentes de inmigración fueron las cartas que los emigrados mandaban a parientes y vecinos en sus aldeas con el relato de sus experiencias. La gran expansión económica del país encontraría en ellas los vasos comunicantes para transmitir expectativas de progreso personal en las comarcas rurales de Italia y España, junto con remesas de dinero y promesas de ayuda a la hora de conseguir trabajo y techo en un país que tenía adicionalmente las ventajas comparativas de la cultura latina y la religión católica.

Quienes arribaron a la Argentina en respuesta a estos incentivos hallaron en esas redes sociales el ámbito propicio para recrear, tanto en el campo como en la ciudad, los espacios de

sociabilidad que les eran familiares. El origen de los inmigrantes constituyó, a su turno, una fuente de inquietud para la elite dirigente. Que no fuesen "los laboriosos europeos del Norte" contemplados en su proyecto ideal comportó, sin duda, una frustración. No obstante, con el transcurso del tiempo, ese defecto de origen fue importando menos; hacia 1900, los piemonteses y los vascos, por su espíritu de trabajo y su estilo de vida austero, ya habían abierto grietas en la muralla de prejuicios que rodeaba a los emigrantes de la Europa del Sur. Este punto de vista favorable no se extendió naturalmente a los sicilianos y los gallegos —las dos corrientes migratorias en alza con el cambio de siglo—, si bien al ser comparados con los trabajadores criollos, inclusive ellos se beneficiaron de una percepción más positiva. Para el Centenario, la imagen de los italianos y españoles en su condición de fuerza de trabajo había mejorado y se contaban entre los inmigrantes preferidos. Este proceso de revalorización no despejó el otro problema suscitado por su tendencia a mantener, una vez en el país, una sociabilidad separada: la formación de un enclave extranjero en una sociedad todavía en busca de consolidar su unidad como nación.

## II

Esta referencia nos introduce en el impacto que tuvo la densa trama de colectividades étnicas que enmarcó la experiencia inmigratoria. Comencemos por destacar que los inmigrantes de mediados del siglo XIX se encontraron en un país con instituciones estatales todavía en formación, insuficientes por lo tanto para responder a sus necesidades sociales. Quienes venían de regiones de Europa en las que la provisión de tales necesidades había dado lugar al desarrollo de sociedades de ayuda mutua replicaron aquí ese formato de asistencia social; el ejemplo fue luego imitado por otros con distinto bagaje, pero igualmente expuestos a las contingencias de la aventura inmigratoria. Surgieron, así, en Buenos Aires y se extendieron en las zonas de reciente poblamiento en el interior, las asociaciones mutuales con servicios que abarcaban desde la cobertura médica, los gastos de sepelio, los subsidios a viudas, huérfanos e inválidos hasta las actividades de recreación y camaradería. Las más difundidas se organizaron según criterios

localistas, la comarca o la provincia; aquellas que, finalmente, habrían de prosperar estuvieron abiertas a cuantos compartían la misma nacionalidad. Este patrón más amplio de reclutamiento condensó un decisivo efecto de la experiencia inmigratoria. Viendo de países atravesados por fuertes fracturas regionales, con una débil identidad nacional, los que llegaban se identificaban con su territorio de origen —eran genoveses, lombardos, calabreses o asturianos, catalanes, andaluces—, pero, a poco de su radicación en la Argentina, la población nativa los clasificaba sin distinción por su nacionalidad; para el caso, italianos o españoles. Las sociedades de ayuda mutua, en su esfuerzo por subsistir, explotaron esa identidad más abarcadora y, a la vez, agregaron a su oferta de servicios el mantenimiento de los lazos con la madre patria conmemorando con fiestas y desfiles públicos sus aniversarios y sus héroes.

En el clima generoso de la ideología pro inmigratoria en boga, floreció la vida asociativa, creando el marco para recibir al aluvión de extranjeros ultramarinos que llegó a partir de 1880. Contra una visión muy extendida en los círculos dirigentes, los inmigrantes padecieron poco el desarraigo: al cabo de la travesía del Atlántico pudieron reencontrarse con sus paisanos, saborear sus comidas de siempre, festejar sus fechas tradicionales, retomar sus querellas políticas, casarse dentro del mismo grupo. Esta última opción estuvo condicionada por la demografía de las corrientes migratorias: fue preponderante en aquellas más numerosas, los italianos y los españoles; en cambio, entre los franceses hubo más matrimonios mixtos. La mezcla se dio sobre todo dentro de familias de europeos y sus hijos argentinos; las uniones de extranjeros con la población nativa se contaron en números poco significativos. Resucitaciones mutuales permitieron a muchos de los inmigrantes prescindir en los hechos de las instituciones del país y transformaron a sus comunidades en entidades cuasi autosuficientes.

Este universo, heterogéneo por la coexistencia de costumbres, lenguas y vínculos étnicos diferentes, exhibía, no obstante, un rasgo común que lo hacía compacto: la negativa generalizada a volverse argentino. Como quedó registrado en el censo de 1914, solo el 1,4 por ciento de los extranjeros había adquirido la ciudadanía. Las razones de esta resistencia han sido objeto de diversas

conjeturas y todas coinciden en ver en ella un comportamiento racional ajustado a su condición de inmigrantes. En primer lugar, estaban los costos asociados al abandono de la nacionalidad: la pérdida de la protección de sus agentes consulares ante los avatares de la justicia local, el riesgo de quedar expuestos a las frecuentes levas militares, la exclusión de las sociedades de ayuda mutua. En segundo lugar, la legislación vigente, que para competir por la emigración europea, no establecía discriminación alguna entre argentinos y extranjeros en el desempeño de actividades económicas, motivación excluyente de los que arribaban al país. Señalemos de paso que si hubo un sector que experimentó las consecuencias de mecanismos informales de discriminación en el mercado laboral, este fue el de los trabajadores nativos en beneficio de la fuerza de trabajo extranjera. Finalmente, para hacerse escuchar por las autoridades, los inmigrantes europeos no necesitaron sacar la carta de ciudadanía y ejercer presión por medio del voto, ya que su extenso movimiento asociativo y sus órganos de prensa les proporcionaban un recurso de primer orden. Distinta fue la suerte de los europeos del Sur en los Estados Unidos: insertados en los niveles más bajos de la estructura social, carecieron de una vía alternativa a la de las máquinas políticas que manipulaban el voto étnico, por lo que se nacionalizaron en proporciones sustantivamente mayores.

Esa población de extranjeros tenazmente apegados a su patria de origen no podía dejar de inquietar a una elite dirigente empeñada a la sazón en la laboriosa empresa de construir un sentimiento de pertenencia a un país que recién había logrado su unificación política. Aliviar esa inquietud poniendo frenos al ingreso de inmigrantes no figuraba entre sus opciones; la prosperidad a la que debía su acrecido poder económico estaba demasiado ligada a la existencia de una fuerza de trabajo constantemente ampliada como para correr el riesgo de comprometerla. La herramienta a la que habría de recurrir frente al desafío de lealtades nacionales rivales sería la misma que era contemporáneamente utilizada en otras latitudes en circunstancias parecidas: la educación patriótica. Como en la Francia de la Tercera República, en la Argentina de principios del siglo XX se puso en marcha un proceso de homogeneización de tradiciones, lengua y arquetipos mediante el adoctrinamiento escolar: si allá se trataba de convertir a los hijos

de bretones y provenzales en franceses, aquí el objetivo consistió en inculcar en los hijos de los inmigrantes europeos una fervorosa identificación con la nueva patria. Evaluada en sus propios términos —producir argentinos—, la operación resultó exitosa y fue obra del poderoso aparato de nacionalización creado por la ley N° 1420, sancionada en 1883, y puesto a punto en los veinte años posteriores: la escuela pública laica, gratuita y obligatoria. Una función similar cumpliría el servicio militar, también obligatorio, implantado en 1901.

La religión cívica impartida en gran escala hizo sentir sus efectos ya en la generación de los hijos de inmigrantes, que comenzaron a aflojar los lazos con el país de sus padres y a identificarse con aquel donde habían nacido. Esa transición debió mucho también a un mecanismo eficaz de coerción informal: el clima de burla y escarnio que acompañó con frecuencia la vida pública de los extranjeros. Los mote de "tano" o de "gallego" podían rebotar en los oídos de los inmigrantes, pero calaban hondo en los de sus hijos. Los comentarios jocosos sobre los hábitos rústicos de los recién llegados, su torpeza para moverse en el nuevo medio, tuvieron un certero impacto entre sus descendientes, que procuraron borrar e incluso despreciaron los rasgos más visibles de su origen familiar. En los tiempos del Centenario, la alarma sobre la salud de la cohesión nacional no había registrado que el mundo de las colectividades étnicas había iniciado un lento proceso de disgregación. Para los inmigrantes, las redes sociales vinculadas a sus lugares de origen fueron una suerte de santuario que facilitaba la adaptación; sus hijos, en cambio, tendieron a tomar distancia de ellas y a incursionar en ámbitos de sociabilidad más amplios. En consecuencia, las escuelas comunitarias desaparecieron, disminuyó la tirada de la prensa étnica, las pautas matrimoniales se hicieron más abiertas, los mitos criollos encontraron un nuevo público.

Hubo en este proceso, reconocible sobre todo en las principales corrientes inmigratorias, un aspecto a destacar: la relativa facilidad con que se fueron diluyendo, hasta extinguirse, tanto la lengua como la memoria viva de la patria ancestral. En verdad, las políticas de nacionalización habían abierto puertas que ya estaban entreabiertas. A diferencia de lo ocurrido en las escuelas públicas francesas con los hijos de los bretones, aquí pudo prescindirse de las sanciones a los hijos de los calabreses o de los gallegos

que se expresaran en sus dialectos: sus propias familias no se esforzaron por que supieran hablarlos, como tampoco habrían de esforzarse por preservar con orgullo sus orígenes extranjeros, que prefirieron silenciar en el intento por hacer que sus hijos salieran sin hipotecas en busca de las oportunidades que prometía el país. Como toda construcción de una identidad nacional, la argentinización tuvo, por cierto, sus costos; vistos de cerca, fueron secretamente autorizados en la intimidad de los hogares de los hombres y mujeres que habían venido para "hacer la América". En los nuevos argentinos sobrevivirá, de todos modos, el componente italiano y español, visible en los gestos, el habla, las comidas, el culto de la familia, de hondo arraigo entre los inmigrantes.

### III

Consideremos ahora el otro decisivo producto del Gran Laboratorio montado en el país en el cruce de los siglos XIX y XX: la transformación de la estructura social. Bajo el impulso del dinamismo de la economía agroexportadora y su difusión en el mundo urbano, esa transformación tuvo un rasgo distintivo: el surgimiento de un amplio estrato de clases medias. En la época, el perfil dominante de las sociedades de América Latina se caracterizaba por la coexistencia de una clase alta en el vértice del poder económico y político, y de una gran masa de sectores populares. Este esquema fuertemente polarizado, apenas corregido por un estrato intermedio de reducidas dimensiones, todavía estaba vigente en la Argentina a mediados del siglo XIX. Los cambios económicos y demográficos lo modificaron progresivamente haciendo despuntar otro más diferenciado. Constituyeron su novedad sobresaliente unos sectores medios integrados al principio por pequeños y medianos empresarios ligados a las actividades del comercio y de las manufacturas promovidas por la prosperidad del campo; también emergió una clase media rural, compuesta sobre todo por arrendatarios. Más tarde se sumarían, en particular a partir de 1900, profesionales y estratos medios asalariados: empleados y funcionarios de la burocracia pública y las empresas privadas. Estas nuevas capas crecieron a un ritmo sostenido y pasaron del modesto 10 por ciento de la población activa en 1869 al 25 por ciento en 1895, para alcanzar el umbral

del 30 por ciento en 1914. En cuarenta y cinco años se multiplicaron por tres en todo el país, y por cuatro —en el mismo lapso— en los centros urbanos. Aquí se impone una aclaración que ya es de rigor: se trató de un fenómeno específico de Buenos Aires y de las provincias del Litoral, la región pampeana. En el resto del país, en el que el impacto de la transformación económica y la inmigración masiva fue menor, estuvo prácticamente ausente y la estructura social conservó en buena medida su perfil polarizado y rígido. Retomando el surgimiento de las clases medias, se ha estimado que dos tercios de los que en 1914 formaban parte de ese agrandado contingente provenían de los estratos más bajos de la pirámide social. Con esta referencia se recorta el otro proceso colectivo que, con la argentinización, singularizó a la sociedad en construcción en el filo del nuevo siglo: una intensa movilidad social.

Protagonistas principales de esa experiencia fueron los inmigrantes ultramarinos; llegados mayoritariamente en edad laboral, se ubicaron, luego de un período variable de adaptación, en las actividades asociadas con la modernización de la economía. Los alcances de este proceso de inserción se aprecian mejor apelando nuevamente a la comparación con los Estados Unidos. Allí, cuando arribaron los emigrantes de la Europa del Sur, el país ya tenía a sus espaldas un importante desarrollo económico, y las posiciones centrales en la estructura ocupacional estaban en manos de quienes habían llegado en primer término, esto es, emigrantes del Norte europeo; los que vinieron en la segunda ola migratoria tenían solo disponibles las ocupaciones más bajas y peor pagas. En la Argentina, las cosas ocurrieron de manera diferente: el período de la inmigración masiva coincidió con el despegue de la economía, es decir, no fue posterior sino simultáneo a la creación de nuevas actividades. En toda la gama de empresas y oficios que proliferaban por detrás y a los costados de la expansión agrícola, tanto en la ciudad como en el campo, los extranjeros tenían la primera palabra. Por lo tanto, la experiencia de la movilidad consistió, al comienzo, más en la ocupación de nuevos lugares que en el ascenso dentro de una estructura preexistente.

El censo de 1914, la primera fotografía de una economía y una sociedad en vías de consolidación, mostró la fuerte presencia de los inmigrantes en todo el espectro de la vida productiva.

Habían nacido fuera del país el 62 por ciento de los que trabajaban en el comercio, el 44,3 por ciento de los que lo hacían en la industria y el 38 por ciento de los activos en el sector agropecuario. Los porcentajes aumentaban significativamente en los distritos donde estaban más concentrados. En la ciudad de Buenos Aires, la proporción de extranjeros en la industria y en el comercio era, respectivamente, de 72,5 y de 68,8 por ciento del total; en las actividades agropecuarias, de 55,1 por ciento en la provincia de Buenos Aires y de 60,9 por ciento en Santa Fe; si al cálculo se agregaran los hijos en condiciones de trabajar, la población activa de reciente origen inmigratorio alcanzaría seguramente magnitudes más elevadas. Inmigrantes por doquier, es cierto. Pero en posiciones sociales diferentes, porque sobre el lugar en el que los encontró la imagen de 1914 había influido su antigüedad en el país, el capital profesional o económico que habían traído consigo, las redes sociales de las que formaban parte.

Con relación a la antigüedad, un año —1880— establece un corte decisivo. Durante las dos décadas previas, el bajo precio de la tierra permitió a un número importante de los inmigrantes tempranos acceder, al cabo de unos años de esfuerzos y ahorros, a propiedades rurales de grandes extensiones. Después, con el progresivo cierre de la frontera agropecuaria y, con él, la valorización de la tierra, esa vía fue cada vez más excepcional, haciendo casi imposible el ingreso al núcleo de los terratenientes de la pampa. En cuanto al capital profesional o económico, sabemos que el grueso de los inmigrantes eran personas de recursos modestos. Pero su instalación en el país tuvo proporciones tan fenomenales que muy rápidamente generó una demanda de servicios de la más variada índole; esta, a su vez, incitó a muchos pequeños capitalistas, con escasas posibilidades de progreso en sus lugares de origen, a cruzar el océano. Para ellos, así como para numerosos profesionales —médicos, profesores, arquitectos, farmacéuticos—, que emprendieron el mismo viaje por razones parecidas, la aventura inmigratoria empezó desde un punto de partida más favorable. Finalmente, las posiciones al alcance de los inmigrantes se debían también a las redes sociales que los acogían al llegar, porque quienes los habían precedido y hecho fortuna ofrecían ayuda material y empleos a familiares y conocidos. A todo esto podemos agregar la contribución de otro factor, que suele ser la

nota de color de tantas biografías individuales: el golpe de suerte —esa información, esos contactos inesperados que hacían visibles los nichos de negocios en un país donde casi todo estaba por hacerse—, que fue la materia de las historias prodigiosas que atravesaban el Atlántico y alentaban la emigración.

Nos hemos referido al cierre de la frontera agropecuaria a propósito de la inserción de los inmigrantes; volvamos ahora sobre él para describir sus implicaciones a fin de alcanzar una visión de conjunto del período. Ese cierre alude al término del largo proceso de ocupación de las praderas fértiles de la pampa a través del desplazamiento de las tribus indígenas fuera de sus territorios originales. Esta empresa, iniciada unas décadas antes, culminó en 1879 con la operación militar denominada Campaña del Desierto, que fue seguida por la venta de millones de hectáreas a grandes estancieros. Estos tiempos coincidieron con el comienzo de la inmigración masiva. La combinación de la oleada de la inmigración masiva y el formidable caudal de la oleada de tierra en grandes propiedades y el formidable caudal de la oleada migratoria se convirtió en la clave interpretativa más popular de un fenómeno característico de la época, la intensificación del proceso de urbanización: hacia la década de 1890, de cada 100 habitantes del país, 37 vivían en centros urbanos; veinte años después, eran más de 50. Para intelectuales y políticos de los años veinte y treinta (y muchos otros después), la consolidación de la gran propiedad terrateniente fue la causa de que el flujo migratorio, en lugar de dirigirse al campo, adonde estaba destinado, terminara encaminándose hacia los centros urbanos.

Esta interpretación es, por varias razones, discutible. En primer lugar, porque, como se desprende del censo de 1869, la inmigración temprana era ya principalmente urbana en las zonas del Litoral, cuando los eventuales obstáculos a la radicación en el campo no tenían la importancia que, se aduce, cobraron después. En segundo lugar, porque del hecho de que los inmigrantes provinieran de comarcas rurales no se sigue que vinieran a trabajar en el campo. Su objetivo dominante, ya lo indicamos, era hacer dinero, y rápido; para ello estaban dispuestos, si era necesario, a reciclar sus habilidades, que no eran muchas, a fin de sacar mejor partido de las oportunidades existentes. Las que ofrecían las ciudades-puerto como Buenos Aires y Rosario eran atractivas para quedarse allí: mejores salarios que en sus países de origen y

múltiples trabajos en la economía urbana que florecía alimentada por la enorme productividad del campo. En este sentido, no cabía afirmar que la opción urbana fue simplemente la respuesta ante la imposibilidad de concretar un proyecto rural. En tercer lugar, porque el número de inmigrantes que se dirigió al campo para probar suerte no fue desdeñable, y se comprende por qué: que la tierra estuviera repartida en el momento de la gran ola migratoria no significa que estuviese plenamente explotada. Entre 1888 y 1916, el área dedicada a la agricultura se multiplicó por siete, pasando de 1,7 millones a 12,6 millones de hectáreas. Ese salto requirió, además de los obreros transitorios para levantar las cosechas, personal de trabajo sobre bases más duraderas. Dentro de él, sobresalieron los arrendatarios, a quienes los propietarios alquilaban sus tierras en parcelas de regulares dimensiones. Inmigrantes en su mayor parte, y sobre todo italianos, el arriendo fue su principal modalidad de inserción y se ajustaba bien a sus planes de vida, que incluían la posibilidad siempre latente del retorno. De ellos y sus familias se nutrió el millón de habitantes que entre los censos de 1895 y 1914 se agregó a la población rural.

La fotografía de 1914 presentaba otro personaje en el paisaje social del mundo urbano: los trabajadores ocupados en los comercios, los servicios, el transporte, la construcción, las industrias; en un 73 por ciento nacidos en el extranjero, estaban a menudo por encima de los trabajadores de origen criollo, que se ubicaban en la base de la pirámide social. Con frecuencia, las distancias entre unos y otros eran socialmente borrosas, pero dejaban de serlo en el empleo dentro de las nuevas actividades de la economía cuando la piel más oscura jugaba en perjuicio de los nativos. En una perspectiva más general, las fronteras del propio universo de los trabajadores estaban en constante movimiento debido a que, en el último tramo del siglo XIX y el comienzo del XX, primaba la gran rotación ocupacional de los inmigrantes dentro de la ciudad y entre la ciudad y el campo. En el límite, la volatilidad se manifestaba asimismo en el retorno a sus países, para no pocas veces regresar. La fluidez del mundo del trabajo se vinculaba, sin duda, a los vaivenes de la oferta de empleo. Pero más profundamente influía una condición de origen: la mayoría de los que desembarcaban en Buenos Aires venía de zonas rurales y carecía de experiencia fabril. El tránsito desde el trabajo al

aire libre y pautado por la salida y la puesta del sol al trabajo en recintos cerrados y controlado por las agujas del reloj era para muchos de ellos una experiencia personal traumática; no debe descartarse entonces que, para sustraerse a esa transición casi siempre difícil o para aliviar sus costos, optaran por circular en el mercado de trabajo urbano o se marcharan hacia otros destinos en busca de mejores horizontes.

Destacar la dureza de las condiciones de existencia de los trabajadores en el medio urbano parece redundante. Buenos Aires y Rosario, el otro polo proletario, no eran un caso aparte en las experiencias de rápida urbanización en el mundo: estuvieron también aquí a la orden del día los problemas de salubridad y hacinamiento que resultaban de la súbita afluencia de grandes masas a ciudades cuya infraestructura respondía a poblaciones de menor tamaño. Mientras se fueron resolviendo —el porcentaje de la población de Buenos Aires que vivía en conventillos descendió del 25 por ciento en 1887 al 10 por ciento en 1919—, no constituyeron un obstáculo al flujo de extranjeros porque estaban incluidos en la lista de precios por pagar en el proyecto inmigratorio, donde figuraban, primero, los afectos abandonados al otro lado del océano. La ciudad, por otra parte, representaba también ganancia: la tertulia con amigos en el bar de la esquina fue un feliz descubrimiento para quienes no habían conocido nada parecido en las aldeas de su terruño.

Volviendo al proceso de movilidad social: si al comienzo consistía en la ocupación de los nuevos lugares que creaba la modernización de la economía, la paulatina consolidación de la estructura ocupacional modificó, elevándolas, las condiciones de acceso. Es aquí donde reaparece el papel de la educación pública, ya no como iniciación en los valores de la nacionalidad, sino como mecanismo distribuidor de conocimientos y destrezas. Colocados en su contexto histórico, el derecho y el deber a recibir una educación básica establecidos por la ley N° 1420 fueron la institución más integradora creada por la elite dirigente en la medida en que igualaba, en principio, la capacidad de las personas para poder usufructuar de las garantías de la ley y las oportunidades de la economía. Financiada con ingentes recursos públicos, la legislación de 1884 puso en marcha una vasta empresa de escolarización cuya envergadura se advierte al tomar en cuenta que

en 1869 solo el 20 por ciento de la población en edad escolar del país —6 a 14 años— asistía a la escuela. Luego del aumento en el número de maestros y establecimientos que siguió a la promulgación de la ley, el panorama se modificó: en 1914, esa población había crecido tres veces y media y el 56 por ciento de los niños recibía instrucción primaria. La cobertura continuó su avance en los años siguientes y en 1930 alcanzó entre el 60 y el 70 por ciento. Por los saberes que impartía, por los principios de higiene y las rutinas de trabajo que inculcaba, la escuela pública fue el nuevo y poderoso factor que acrecentaba las posibilidades de ascenso social.

#### IV

En este breve sumario de las transformaciones del país, llega el momento de retomar las tensiones y los conflictos que atravesaban la sociedad que emergía de la modernización económica y la presencia masiva de extranjeros. En primer lugar, estaba la cuestión social y su manifestación más expresiva: la movilización de los trabajadores en demanda de salarios y mejores condiciones de trabajo. ¿Qué decir sobre las huelgas que formaron parte de la escena urbana hacia fines del siglo XIX que permita capturar su peculiaridad en el universo más amplio de la protesta obrera? Para empezar, que si es plausible ver en ellas un conflicto entre capital y trabajo es a condición de reconocer que en el polo del capital no figuraron los verdaderos dueños del poder económico en el país, los terratenientes de la pampa. En efecto, los adversarios típicos de la movilización obrera fueron los propietarios de los comercios y las industrias que, en una proporción del 70 al 80 por ciento según el censo de 1895, habían nacido fuera del país y eran inmigrantes que habían hecho rápida fortuna. Por consiguiente, las huelgas no detenían la marcha de la economía, ceñidas al ámbito de la empresa, ni perturbaban el orden público, solo suscitaban la reacción policial cuando se extendían fuera de ella con piquetes y mitines. Tampoco inquietaban a la elite dirigente, convencida de que la joven y promisoría Argentina estaba a salvo de las turbulencias de la agitación social en los países de la Vieja Europa.

En 1902, esa visión optimista recibió un llamado de atención cuando en noviembre, mes de embarque de las cosechas, una

sucesión de conflictos bloqueó los puertos del Litoral y paralizó las exportaciones. La respuesta fue rápida y contundente; antes de que el Ejecutivo declarara el estado de sitio, el Congreso aprobó, en un breve trámite, la Ley de Residencia, que autorizaba al gobierno a expulsar del país o impedir su ingreso a cualquier extranjero considerado peligroso, por medio de una simple decisión administrativa y sin necesidad de orden judicial alguna. Como había ocurrido al abordar la cuestión nacional, para hacer frente a la acción obrera en el nervio vital de la economía, la elite dirigente había consultado también la experiencia internacional en busca de inspiración y la encontró en las leyes contra los anarquistas, aprobadas en varios países europeos como respuesta a los atentados terroristas que habían costado la vida a presidentes y reyes. Por la conmoción que produjo, la huelga del puerto desempeñó el papel de aquellos magnicidios y activó una reacción que se propuso aleccionadora, pero con una diferencia: la Ley de Residencia no criminalizaba a los anarquistas, cuya presencia era notoria en los medios obreros, sino a los extranjeros. Esta fue la figura a la que apeló el gobierno para sacarse de encima a los seguidores de Mijail Bakunin que llegaban aprovechando las facilidades otorgadas por las autoridades de Italia, de donde provenían en su mayor parte, para que salieran del país y se dirigieran a la lejana América; con variantes, en los Estados Unidos se recurrió por entonces a un expediente parecido.

La represión no fue, sin embargo, toda la respuesta de la elite dirigente ante la movilización obrera. En 1904, los mismos autores de la Ley de Residencia dieron a conocer un frondoso proyecto de Código del Trabajo con el que aspiraban a colocar los problemas del mundo laboral bajo la tutela de la regulación del Estado. La iniciativa contemplaba el establecimiento de garantías mínimas en los contratos de trabajo y, a la par que reconocía a las asociaciones gremiales, les imponía la renuncia a prácticas que alterasen la paz social y el orden público. Los empresarios, en nombre de la libertad de empresa, y los militantes obreros, en defensa de la autonomía de la protesta social, resistieron la intromisión de los poderes públicos y, en definitiva, el Código de Trabajo ni siquiera fue discutido. Las relaciones laborales se desarrollaron de allí en más —sujetas a las fuerzas de mercado y a la vigilante amenaza de la policía— en un vacío normativo que se extendió por muchas décadas.

Para regresar al conflicto entre capital y trabajo, hay que destacar que el polo del trabajo no tenía en estos primeros tiempos una entidad compacta, consistente. Ya aludimos al estado de fluidez de la fuerza de trabajo. Agreguemos que la yuxtaposición entre identidad étnica e identidad obrera diluía también la intensidad del conflicto social cuando, como era frecuente, patronos y trabajadores compartían la misma nacionalidad. Además, la constante llegada de inmigrantes cuyo objetivo primordial era escapar a la condición proletaria tampoco facilitaba la cohesión del polo del trabajo. En estas condiciones, la movilización obrera no se tradujo en verdaderos avances en el nivel organizativo. El ciclo de la agitación social iniciado en 1900 culminó en las huelgas de 1910. Este fue el momento de apogeo del anarquismo, pero también el principio de su declinación: una nueva legislación represiva, la Ley de Defensa Social, desencadenó una fuerte persecución y la pérdida de sus principales cuadros militantes. Hugo del Campo ha indicado que el eclipse del anarquismo responde, en verdad, a causas más complejas que el solo impacto de la represión. En la morfología del mundo de trabajo, hasta entonces altamente indiferenciada, empezó a delinearse el perfil de sectores que, habiendo alcanzado una mayor estabilidad laboral, vieron en su condición obrera un estatus más estable; en consecuencia, su orientación fue tratar de mejorarla en lugar de rebelarse contra ella. Con este respaldo, emergió y se consolidó en las filas del mundo del trabajo una nueva corriente, el "sindicalismo", que frente a la huelga general (el arma preferida por los anarquistas) y a la vía parlamentaria (la opción de los socialistas) llamaba a concentrar las energías en el fortalecimiento de la organización gremial y en la estrategia de la huelga reivindicativa. Quienes se hicieron eco de ese llamado fueron, entre otros, los ferroviarios, que, por su ubicación central en la economía agroexportadora, se convirtieron en el faro de la acción obrera.

Sin embargo, el eclipse del anarquismo —con la carga temeraria de su utopía revolucionaria— no ahorró a los trabajadores las consecuencias de la represión. Un nuevo ciclo de huelgas entre 1917 y 1921 tuvo un desenlace violento de proporciones inéditas en la trayectoria de los conflictos obreros en la Argentina. En la revuelta urbana de la Semana Trágica de 1919 en Buenos Aires y en la huelga de los peones rurales de 1921 en la Patagonia, los

muertos se contaron por centenas. Con su ominoso cortejo, el país ingresó de lleno en la historia negra de las luchas sociales del mundo. Vista a la distancia, esa coyuntura, en el comienzo de los años veinte, vino a cerrar los tiempos de la efervescencia obrera.

En esa coyuntura algo más llegaba a su fin: la posición preeminente que la clase alta tradicional ocupaba en la vida social y política. Para seguir la secuencia de ese proceso, también ilustrativo de las tensiones y conflictos de una sociedad en transformación, el año del Centenario es el punto de partida. Como ya señalamos, poco y nada quedaba de las esperanzas puestas en la misión civilizadora de la inmigración. La distinción hecha por Alberdi —todo lo europeo, del lado de la civilización y todo lo nativo, del lado del atraso— prácticamente se había invertido. En los círculos dirigentes se asistía, en efecto, a un verdadero viraje que cuestionaba las premisas del proyecto de modernización. En este nuevo clima de ideas, los rasgos negativos de los inmigrantes se generalizaban y eran el sinónimo de la temida dilución de la identidad nacional, la corrupción del espíritu público por un crudo materialismo, la importación de la teoría y la práctica de la lucha de clases. La contrapartida de esta extendida xenofobia fue la vigorosa exaltación de la tradición nacional que, con modulaciones diferentes, hundía sus raíces en el pasado preinmigratorio y se encarnaba, en su versión más influyente, en la figura arquetípica del gaucho de la pampa. Este nacionalismo tradicionalista, distante del nacionalismo integrador que inspiraba a la educación patriótica, estaba destinado, en rigor, a una existencia estrictamente simbólica. Sus correlatos estaban, por la fuerza de las cosas, cada vez más lejos de la experiencia directa: el gaucho era una especie en extinción y la pampa estaba poblada de chacareros inmigrantes, la paz social del mundo rural no era la misma después de que la huelga de los arrendatarios de 1912, el Grito de Alcorta, llevó hasta allí las aristas conflictivas de la ciudad cosmopolita. La xenofobia en boga careció, por lo demás, de efectos prácticos: no alteró la política de puertas abiertas —terminada la Gran Guerra, el país recibió en los años veinte un nuevo aluvión de inmigrantes— ni debilitó en las escuelas públicas la vigencia de la opción que Domingo F. Sarmiento había hecho suya ante la vieja disyuntiva entre civilización o barbarie.

Nada de todo esto detuvo la reconversión que la clase alta hizo de la imagen de sí misma y de su proyección sobre la sociedad en sintonía con sus nuevas referencias culturales. El énfasis en el estilo de vida —refinado, europeizante— en torno al cual había construido su identidad como grupo aristocrático en 1900, se prolongó ahora en un énfasis complementario, el de la antigüedad de sus orígenes y su protagonismo en la edificación de la nación: estos eran los títulos con que se presentaba, en el país de los inmigrantes, como clase patricia. Este auge del nacionalismo tradicionalista resumió el punto de llegada del itinerario de la elite dirigente. Guiada por el credo liberal de mediados del siglo XIX, había soñado con sacar al país del atraso y encaminarlo por el sendero de la modernidad; ahora que esta había llegado y mostraba su rostro inconfundible —una sociedad en movimiento por las avenidas del ascenso social y de los conflictos laborales—, desandaba el camino recorrido y en brazos de la prédica nacionalista se volvía con nostalgia hacia una Argentina premoderna, donde las jerarquías sociales eran respetadas y los gauchos sabían el lugar que les correspondía. Este cambio de perspectiva, una orientación más volcada hacia el pasado que hacia el futuro, marcó el momento en que la clase alta abandonó su papel de elite dirigente para comportarse más como una elite dominante que se replegó en la defensa de sus intereses y de una visión del orden social que se había tornado patéticamente anacrónica.

Con el telón de fondo de la prosperidad de posguerra, la modernización redobló su ritmo y aceleró la mutación del paisaje humano del país. En cuanto al acceso a los artefactos de la modernidad, la Argentina se midió con los grandes países: en 1929 ocupaba el quinto lugar en el mundo en la relación automóvil por habitante. En América Latina no había otro que la igualara: en 1925, con el 16 por ciento de la población de la región, tenía el 45 por ciento de los teléfonos y el 58 por ciento de los autos. Y un dato importante: en 1927 era el segundo cliente, después de Inglaterra, de las películas producidas en los Estados Unidos. Los treinta millones de espectadores argentinos que concurrían cada año a algunas de las 972 salas de cine recibían en primera persona la influencia del nuevo liderazgo cultural del país del Norte en materia de hábitos y costumbres: la idea del confort de cuño *yankee* penetró sin trabas en un público ávido de las últimas novedades y

para el que el baño junto al dormitorio, y ya no en un recinto aislado fuera de la vivienda, era una conquista antigua y ampliamente compartida. A su vez, la acción sistemática de la escuela pública ensanchó el universo de lectores, que acogía los 300.000 ejemplares de *Crítica* —el diario popular, abundante en fotografías y notas de fuerte impacto—, las joyas de la literatura a precios baratos que en grandes cantidades lanzaban las casas editoriales, y las revistas semanales de deporte —que, junto con la radio entronizaron a los nuevos ídolos populares del mundo del fútbol y la canción—. En el contexto de estos cambios, y de una sociedad más expansiva por obra de la movilidad social, los llamados al rescate de la tradición nacional sonaban huecos; eran la expresión de las dificultades de la clase alta para hallar un lugar al paso de los tiempos. A la pérdida del control político en las elecciones de 1916, se sumó el ocaso de su gravitación social ante el avance de los batallones de clases medias que invadieron lugares que anteriormente disfrutaba en exclusividad. Hacia el final de los años veinte, familias de la alta sociedad abandonaron a una multitud de nuevos veraneantes la Playa Bristol, el sitio de la vida social elegante en la Mar del Plata de la *Belle Époque*, e iniciaron el éxodo al Sur, con destino a Playa Grande.

El episodio en el balneario a orillas del Atlántico condensa uno de los rasgos más perdurables de las transformaciones operadas en la sociedad, la consolidación de un *ethos* cultural igualitario, esto es, la convicción de amplias franjas de la población de que ninguna persona era por nacimiento inferior a otra, que cualesquiera fuesen las diferencias de ingresos y educación, todas estaban en un pie de igualdad de derechos y, por lo tanto, que no había posición social ni bien público que, en principio, estuvieran fuera de su alcance. La Argentina que emergió del proceso de expansión económica y de la movilidad social fue una sociedad caracterizada por una mentalidad igualitarista. Por cierto, hubo quienes se quedaron con la parte del león de la prosperidad; la aventura del ascenso tuvo sus postergados. Pero, como experiencia colectiva, el Gran Laboratorio que fue el país en el cambio de siglo generó aspiraciones y expectativas que erosionaron los cimientos de la estructura jerárquica preexistente y colocaron en su lugar los de una sociedad más abierta. En la década del veinte, el país —en sus zonas centrales del Litoral— tenía muy

pocos puntos de contacto con el resto de América Latina y, a pesar del trasfondo europeo de muchas de sus costumbres, se diferenciaba también del Viejo Mundo. En la comparación propuesta por Ezequiel Gallo, se parecía más, por la plasticidad de la estructura social y la hostilidad a las diferencias de clase, a las nuevas sociedades que habían surgido en las praderas de los Estados Unidos y Australia.

## SEGUNDA PARTE

### LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y SUS CONFLICTOS

Al avanzar en el tiempo e internarnos en los años treinta, tenemos por delante la formación y posterior impacto de un nuevo *shock* demográfico. Aludimos a la caravana incesante de hombres y mujeres que partían desde el interior del país en busca de trabajo y se dirigían a Buenos Aires y su periferia urbana. Las migraciones internas no eran, en verdad, un fenómeno novedoso; los desplazamientos de población desde las zonas más pobres del país detrás de las oportunidades de empleo venían de muy lejos. Así, por ejemplo, las provincias del Noroeste —Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca— eran áreas de emigración: de ellas se nutría la demanda de brazos de la industria del azúcar de Tucumán; también aportaban, en cantidades muy inferiores a las de la inmigración ultramarina, su cuota a las actividades agrícolas de la región pampeana. Respecto del ciclo migratorio de la década de 1930, reiteremos lo que se sabe: en sus orígenes gravitó la crisis mundial de 1929 y sus efectos. Pero agreguemos algo más: pocos fueron los países de América Latina para los cuales la Gran Depresión constituyó una coyuntura crítica que dividió en dos la trayectoria de su patrón de desarrollo, porque pocos habían logrado insertarse tan eficazmente como la Argentina en el comercio internacional exportando alimentos. De ser la clave de su mayor prosperidad entre los vecinos, pasó a ser la causa de su mayor vulnerabilidad a los coletazos de la crisis: el país vendía al mundo bienes que dejaron de ser demandados como antes. El colapso de las exportaciones tuvo dos consecuencias. Por la primera, miles de productores del campo vieron disminuir sus ingresos a

valores que comprometían el nivel de subsistencia. La segunda fue el estímulo a la producción de bienes manufacturados, que no podían importarse, para abastecer al amplio mercado de consumo urbano, legado de los años de bonanza agrícola. Ambas consecuencias dieron lugar, de un lado, a un éxodo rural en masa y, del otro, a la multiplicación de puestos de trabajo en la industria.

Ya exploramos la naturaleza del desafío del primer *shock* demográfico. Veamos ahora el que emergió al compás de las oleadas de provincianos que emprendieron esta versión renovada de la aventura inmigratoria. Una vía de entrada la brindaba la propia magnitud de ese flujo con destino al Gran Buenos Aires, tal el nombre con el que comenzó a ser conocido el vasto perímetro que reúne a la ciudad capital y a los partidos del primer cordón, como Vicente López, San Martín, Morón, La Matanza, Avellaneda, Lanús, Quilmes. Los 8000 migrantes internos que recibía por año hasta 1936 pasaron a un promedio de 70.000 entre 1937 y 1943, y a 117.000 en el período 1944-1947. En total, se sumaron cerca de un millón de nuevos residentes al Gran Buenos Aires, que creció de los 3,4 millones de habitantes en 1936 a los 4,6 millones registrados en 1947; en forma previsible, también aumentó su incidencia en ese conglomerado urbano, desde el 12 por ciento en 1936, al 29 en 1943, y al 37 en 1947, proporciones que se incrementaron aun más entre los estratos más bajos. En cuanto a sus lugares de origen, en 1947 casi las dos terceras partes provenían de la región pampeana, con una contribución del 40 por ciento de los oriundos de la provincia de Buenos Aires, esto es, las zonas más afectadas por la crisis agrícola. Por entonces, las actividades de los ingenios azucareros de Tucumán, Salta y Jujuy y las más recientes del cultivo del algodón en Chaco contribuyeron a disminuir la emigración desde las provincias del Noroeste y del Noreste hacia el Gran Buenos Aires.

El otro ángulo para apreciar los alcances de la transformación en curso son los cambios en la estructura del empleo. Al cabo de unos tres años, el país dejó atrás la recesión de 1930 y retomó la senda del crecimiento con el liderazgo de la industria, que ya contaba con una plataforma productiva. Poco después, los efectos negativos de la Segunda Guerra Mundial sobre el comercio internacional dieron otro impulso a la industria de sustitución de importaciones y a la demanda de trabajo. Entre 1935 y 1946, el

número de asalariados industriales siguió una curva ascendente: los 400 mil que eran hacia 1935 se duplicaron a 800 mil en 1943 y alcanzaron el millón en 1946. A su mayor número se agregó, además, su mayor concentración: el incremento de la ocupación en la industria se produjo en las fábricas, que pasaron del 30 por ciento en el conjunto del sector secundario en 1936 al 50 en 1946, mientras que los talleres cayeron en este lapso del 52 al 30 por ciento; la concentración fue también geográfica porque, en 1946, las empresas del Gran Buenos Aires daban empleo al 70 por ciento de los trabajadores del país. Con la incorporación de estos nuevos contingentes en la industria en expansión y, a su vez, el brusco descenso de la inmigración extranjera en 1930, se produjo una mutación en gran escala del mundo del trabajo. Más concretamente, a partir de mediados de los años treinta y mediante la fusión de antiguos y más recientes trabajadores, vio la luz en el país la primera clase obrera industrial. No es que antes no hubiera existido, sino que nunca como entonces exhibió una densidad social de tal envergadura y ocupó un lugar tan central en el núcleo dinámico de la economía nacional. Por sus implicaciones en la vida social y política, este es un fenómeno comparable al que había dado lugar la masiva inmigración extranjera, a unos cincuenta años de distancia. Cabe preguntarse, como lo hemos hecho en su momento con esta, cuáles fueron las reacciones que suscitó.

## I

Comencemos por las que partieron desde las filas del movimiento obrero. Este era todavía un gremialismo organizado sobre todo en los sectores del transporte y de los servicios, donde sobresalía la Unión Ferroviaria por el lugar clave que tenían los trabajadores del riel en la economía agroexportadora. Esa ubicación, a la que debían sus mayores beneficios relativos, se transformó, con la crisis de 1929 y sus secuelas, en una desventaja: para evitar la ola de despidos anunciada por las compañías ferroviarias, cedieron buena parte de esos beneficios, no sin antes reclamar en vano la intervención favorable del gobierno. Golpeados por la crisis, no fueron ellos los que movilizaron los medios para organizar a los obreros de la industria, como lo habían

hecho en el pasado cuando la fuerza de trabajo era más joven y mayor la resistencia patronal. Esa iniciativa estuvo a cargo de una corriente minoritaria del sindicalismo, los comunistas, que iniciaron su penetración en ese territorio todavía virgen procurando introducir en él la conciencia de la acción conjunta. Con la reactivación de la economía, encabezaron huelgas entre los obreros textiles, del vestido, la madera, la construcción, los frigoríficos. Las medidas de fuerza perseguían, por una parte, la fijación de condiciones de trabajo y salario mínimas y uniformes, y, por la otra, el reconocimiento de la representación sindical; demandas que ponían de manifiesto el carácter embrionario del sistema de relaciones laborales.

En este plano, el vacío normativo era de larga data. Desde que se frustró el Código de Trabajo de 1904, los avances legislativos habían sido más bien modestos. La Ley de Descanso Dominical de 1905 tenía vigencia solo en la Capital y sus disposiciones estaban sujetas a numerosas restricciones. Después de varios intentos fallidos, en 1915 se aprobó la ley sobre accidentes de trabajo, pero dejaba muchos cabos sueltos en cuanto a la interpretación de sus beneficios. La ley sobre la jornada de ocho horas fue votada recién en 1929, cuando ya era una práctica con una antigüedad de diez años, sobre todo en Buenos Aires. Hay que destacar, asimismo, que el movimiento obrero tampoco encaminó inicialmente sus demandas por la vía de la legislación, sino que prefirió hacer presión directa sobre los empresarios. El resultado fue una estructura laboral fuertemente heterogénea, que condensaba el desigual poder de negociación de los diversos sectores obreros. Las mejoras que lograban obtener, por ejemplo, los ferroviarios o los empleados de comercio, no tenían su contrapartida en otras categorías. En el momento del despegue de la industria es difícil hablar, por lo tanto, de la existencia de una fuerza de trabajo unificada alrededor de un estatuto de derechos y garantías compartido. Una dificultad similar es visible en el plano organizativo: los sindicatos no acompañaron ni el ritmo ni la dirección del ingreso de nuevas camadas de trabajadores. Si bien después de 1935 se registró un aumento del activismo en las fábricas, este no se tradujo en un incremento de la sindicalización: la proporción de los afiliados a los sindicatos sobre los asalariados de la industria apenas se elevó del 12 por ciento en 1936, al 14 en 1941. La referencia al

vacío normativo también aquí es pertinente. El limbo legal en que se hallaban las organizaciones obreras escasamente contribuía a estimular la participación: ninguno de los veinticinco proyectos de ley presentados en el Congreso entre 1900 y 1941 con el fin de reconocer y regular la actividad de los sindicatos había sido sancionado.

Este panorama de las relaciones laborales durante el período de la restauración conservadora, abierto con el golpe de 1930 y prolongado luego por el fraude electoral, experimentó cambios en el tramo final de la década. El primero de ellos se produjo en el ámbito de los poderes públicos: el Departamento Nacional del Trabajo y una agencia similar en la provincia de Buenos Aires comenzaron a involucrarse en los conflictos laborales, ofreciendo sus buenos oficios a las partes en pugna. A pesar de no tener fuerza legal, estos ejercicios de mediación alentaron el paulatino aumento de los contratos obrero-patronales; también se incrementó la cantidad de trabajadores en huelga que resolvían sus disputas por medio del arbitraje. Sin embargo, a juzgar por el número de sus beneficiarios, el nuevo curso tuvo repercusiones limitadas: en la mayoría de las empresas industriales, las condiciones de trabajo continuaban siendo decididas unilateralmente por la gerencia; entre tanto, los acuerdos y compromisos, cuando existían, como no eran obligatorios quedaban expuestos a los vaivenes de las relaciones de fuerza en el terreno económico.

El segundo cambio de importancia se produjo en la orientación del movimiento obrero. La primera señal fueron los llamados a la intervención de las autoridades que acompañaban las huelgas. Dictados las más de las veces por sus propias debilidades, anunciaban de todos modos una nueva perspectiva. Para unos cuadros sindicales que habían privilegiado la acción en el mercado y concebido a las instituciones políticas como un epifenómeno de la economía, la búsqueda de la intervención gubernamental implicaba todo un viraje: a través de él se filtraba un nuevo consenso en torno a la idea de la relativa autonomía de los poderes públicos. Bajo sus auspicios, cobró forma una estrategia de presión política que, revisando la tradición del movimiento obrero, tuvo por eje dos pilares: un programa de reformas laborales y la reivindicación de un lugar en su proceso decisorio. Esta

aspiración del sindicalismo a un estatus reconocido, con plenos derechos, se confrontó hacia 1940 con la restauración conservadora en su hora más regresiva. En esas circunstancias, el ciclo de la politización de la acción sindical avanzó un casillero y culminó en un acercamiento a los partidos opositores, en el que los reclamos obreros se fundieron con las demandas de democratización política.

Recapitulando la trayectoria del mundo del trabajo recién esbozada, tres son los datos para retener con vistas a su probable evolución en el futuro. En primer lugar, condiciones propicias para que se extendiera entre los trabajadores el sentimiento de ser parte de una experiencia común debido a su concentración en empresas de mayor tamaño en el tejido urbano del Gran Buenos Aires. Luego, la difusión de la tradición sindical encarnada en los militantes comunistas como instrumento para iniciar a los nuevos asalariados en las prácticas del trabajo organizado. Finalmente, el vuelco del movimiento obrero a la participación en la arena política. Estos tres datos apuntaban en una dirección: el nacimiento de un fuerte potencial de movilización social en el corazón de una economía en crecimiento. Razones para que ese potencial se hiciera efectivo no faltaban: por un lado, la evolución de los salarios no acompañaba la marcha de la economía; por el otro, el aumento sostenido de la ocupación fortalecía paso a paso el poder de negociación de los trabajadores. Un escenario semejante reunía las circunstancias típicamente asociadas al incremento de la combatividad obrera: una renovación de la fuerza de trabajo por el flujo de nuevos contingentes, la acumulación de demandas insatisfechas, un mercado laboral favorable. Proyectando hacia adelante ese cuadro de situación, era verosímil esperar que se produjera, más temprano que tarde, un alza de los conflictos y, con ella, un ascenso de las corrientes más radicalizadas del movimiento obrero.

Llegados a este punto, sabemos que esa fue una de las causas del golpe militar que en 1943 puso fin a la restauración conservadora. Sabemos, también, que su primera reacción, previsiblemente represiva, fue bien pronto secundada por otra más innovadora: la que impulsó Juan D. Perón desde la conducción del régimen militar con el fin de potenciar el papel mediador del Estado en las relaciones entre capital y trabajo. En su diag-

nóstico, si los poderes públicos continuaban ignorando los problemas del mundo del trabajo, mientras crecía el fermento del malestar obrero y avanzaban las ideologías de clase, la cohesión social del país estaba amenazada. Con esa convicción irrumpió por medio de decretos en las empresas, impuso la negociación colectiva, alentó la sindicalización, reparó viejos agravios. La intervención estatal despertó expectativas dentro del movimiento obrero, que por años la había reclamado en vano. En cambio, fue recibida primero con frialdad y después con hostilidad por los empresarios. Como sugiere Tulio Halperin Donghi, en la Argentina faltaba la condición previa que en otros países había hecho posible que el mundo de los negocios acompañara una apertura laboral aun al precio de sacrificios inmediatos: el temor a un desborde de la combatividad obrera. En todo caso, para las clases patronales, si existía un riesgo virtual, este se materializaba por la propia gestión de Perón, que, con el pretexto de poner al país al abrigo del comunismo, exasperaba las tensiones sociales. Este contrapunto entre un militar surgido de las entrañas del Estado y los dueños del capital marca el contraste entre la coyuntura de los años cuarenta y los tiempos del Centenario. Entonces, la elite dirigente había cerrado filas a fin de preservar la cohesión nacional frente a la avalancha de extranjeros. Ahora, en cambio, la amenaza a la cohesión social que implicaba el potencial de movilización del mundo del trabajo no tenía la misma y unívoca visibilidad; por consiguiente, la gestión de Perón avanzó en medio de fuertes cuestionamientos. No vamos a detenernos aquí en el accidentado itinerario de su empresa política; basta con recordar que, luego de salir airoso en la jornada del 17 de octubre de 1945, fue elegido en la presidencia y puso en práctica desde allí, distribuyendo nuevos derechos y recursos a los trabajadores, las líneas maestras de su estrategia preventiva.

A fin de poner en perspectiva los años por venir, consideremos las diferencias entre el impacto del período de la inmigración masiva y el de las migraciones internas en la vida social y política del país. En cuanto al primero: después de cinco décadas de inmigración casi ininterrumpida podría decirse que, mediante la mezcla y la aculturación, la sociedad en la región pampeana se había hecho de nuevo en gran parte por obra de

los propios migrantes y de sus descendientes. Los efectos de esa transformación en el terreno político-electoral habían sido, en cambio, prácticamente nulos por no adquirir la ciudadanía argentina. Por lo tanto, durante los casi cuarenta años en los que del 60 al 80 por ciento de los varones adultos en el polo dinámico del país no tuvo derecho a votar, el resultado de las elecciones quedó en manos de la restante minoría del 20 al 40 por ciento. Esta situación paradójica comenzó a revertirse gradualmente con el ingreso a la vida política de los hijos de los inmigrantes. En síntesis, el impacto de la inmigración ultramarina se hizo sentir en la conformación de la sociedad mucho antes que en las luchas por el poder político. Al considerar el período de las migraciones internas, constatamos una secuencia inversa. Los trabajadores rurales, los pequeños arrendatarios, los empleados y obreros de los pueblos de las zonas agrícolas no encontraron en el Gran Buenos Aires una sociedad toda por hacerse, sino otra sustancialmente hecha. En consecuencia, lo que tenían por delante era un proceso de asimilación o incorporación a la sociedad preexistente. Ocurrió, sin embargo, que las contingencias de la política hicieron que ese proceso se desarrollara en dos planos simultáneos. En efecto, y paralelamente a su inserción en la vida social y económica, fueron llamados a desempeñar un papel político protagónico poco tiempo después de haber abandonado sus lugares de origen. Su llegada coincidió con la emergencia de un líder en busca del apoyo popular, que les abrió las puertas a una influencia precoz en el terreno político-electoral. Esta coincidencia imprimió a la movilización de los trabajadores en los años peronistas un ritmo acelerado y, por ello mismo, un trámite más conflictivo.

## II

El escenario físico dentro del que se desarrolló este nuevo episodio en la trayectoria de la sociedad argentina era un país más vertebrado. En primer lugar, por el renovado vigor de la urbanización: el 62,7 por ciento de los casi 16 millones de habitantes registrados por el censo de 1947 residía en localidades de 2000 y más habitantes, la medida convencional de urbanización.

Este crecimiento se produjo en aglomeraciones de mayor tamaño. En 1914, la fecha del censo anterior, además de Buenos Aires, solo otras dos ciudades tenían más de 100.000 habitantes: Córdoba y Rosario. En 1947, en esa categoría figuraban otras cinco más: Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, Santa Fe y Tucumán. Las grandes ciudades concentraban el 66,2 por ciento de la población urbana, con una aglomeración, el Gran Buenos Aires, donde vivía y trabajaba un cuarto de la población del país. Puede decirse, por consiguiente, que al iniciarse los años peronistas, la trama social del mundo urbano constituía el ambiente natural de una mayoría de los argentinos. En segundo lugar, la ampliación de la cobertura de los medios de comunicación contribuía a ponerlos en contacto entre sí. La radio, en particular, adquirió un carácter masivo y era la estrella entre los artefactos de uso doméstico. Muy pocos eran los hogares que tenían heladera, así como los que contaban con planchas y máquinas de coser, pero en casi todos había una radio. En el inventario del censo de 1947, la ciudad de Buenos Aires estaba a la vanguardia con un aparato cada 1,2 viviendas; en el resto del país, la proporción era de uno cada dos. La difusión de las radios corría en paralelo con la penetración de las principales emisoras, con base en la Capital; por medio de contratos con las estaciones de radio del interior y las transmisiones en cadena, a mediados de la década de 1940 disponían de una audiencia profusamente distribuida en el territorio del país.

En estas condiciones, la experiencia social y política de los trabajadores que tuvo por ámbito el Gran Buenos Aires encontró la plataforma propicia para dilatar su resonancia y convertirse en un fenómeno de alcance nacional. Sin duda, las políticas estatales se proponían ese objetivo. Pero su eficacia estuvo facilitada por la mayor vertebración de un país en el que crecían las ciudades y se expandían los medios de comunicación. Las muchedumbres que partían de las estaciones de ferrocarril y las terminales de ómnibus de las provincias hicieron el resto, al proyectar más tarde, sobre sus lugares de origen, el eco de sus logros en la metrópoli, como lo habían hecho los inmigrantes extranjeros con sus cartas desde América a los familiares y paisanos que quedaron del otro lado del Atlántico.

## III

Volvamos a la situación del mundo del trabajo tras el golpe de 1943. Con la llegada de Perón a la presidencia en 1946, el potencial de movilización allí existente se hará finalmente efectivo: suprimidas las corrientes de izquierda por medio de la represión y la cooptación, se desarrolló bajo la protección oficial. Su principal objetivo era concretar en los hechos, frente a la resistencia de los empresarios, las reformas laborales promovidas por la legislación de origen estatal: el aguinaldo, los salarios mínimos, las vacaciones pagas, las compensaciones por despido y accidentes de trabajo. Estas reformas comportaban una ruptura. Como anticipamos, las relaciones laborales habían descansado hasta allí en el acuerdo voluntario entre las partes. Debido a las diferencias en el poder de negociación entre los trabajadores y los empresarios en los distintos sectores de actividad, esto había generado un gran margen para la heterogeneidad en materia normativa. Las reformas laborales alteraron ese estado de cosas al establecer un marco de garantías de alcance general y crear tribunales de trabajo para asegurar su aplicación. Al sacar del terreno de la negociación obrero-patronal cuestiones clave de las condiciones de empleo, la intervención estatal volvió al mercado de trabajo menos mercado; en adelante, su funcionamiento respondió menos a relaciones de fuerza fundadas en criterios económicos y mucho más al propósito de generalizar entre los asalariados los atributos de una ciudadanía social.

El complemento de los nuevos derechos laborales fue el acceso a mayores recursos por medio de cambios en la distribución del ingreso. Sobre estos cambios influyeron, en primer lugar, las transformaciones inducidas por el desplazamiento de trabajadores de las zonas rurales a las actividades urbanas antes y después de 1946. Esto implicó para una mayoría de ellos el acceso a ocupaciones con salarios superiores a los de sus lugares de origen. Así, la relocalización de la fuerza de trabajo contribuyó naturalmente al aumento de la participación de los salarios en el ingreso nacional. Este resultado casi forzoso de la transición a un país más urbano fue, a su vez, potenciado desde el gobierno con dos instrumentos. Uno de ellos fue el fomento de la sindicalización, que produjo resultados sin precedentes: en 1948 la proporción de los

trabajadores afiliados sobre la población asalariada era del 30,5 por ciento y, seis años más tarde, en 1954, aumentó al 42,5. Estos promedios nacionales eran mucho más altos entre los trabajadores urbanos, en donde la tasa de sindicalización ascendía al 50 y 70 por ciento y engrosaba las filas de sindicatos organizados por grandes ramas de actividad, según el modelo que había ido imponiéndose durante la década de 1930. Por su volumen y su grado de centralización, la estructura de los sindicatos solo era comparable a la de países europeos de tradición sindical más antigua. Con ese poder de presión, los trabajadores estuvieron en condiciones de obtener aumentos de salarios por medio de negociaciones colectivas que cubrieron progresivamente el mercado de trabajo. Otro instrumento de la acción gubernamental fue la política de crédito barato y de proteccionismo en beneficio de los empresarios urbanos, sobre todo los industriales. El crédito barato sirvió para financiar sus mayores costos laborales, y el proteccionismo, para poner la nueva estructura de salarios de sus empresas lejos de la competencia de las manufacturas extranjeras. Adicionalmente, el poder adquisitivo de los salarios estuvo reforzado con controles de precios y subsidios a los bienes de la canasta popular, los alimentos en primer lugar. Estos instrumentos sumaron sus efectos a las transformaciones del mercado de trabajo y a la expansión sindical y promovieron una redistribución sustantiva del ingreso nacional: la participación de los salarios pasó de 37 por ciento en 1946 a casi el 40 en 1948, hasta alcanzar el 47 por ciento en 1950, cuando se registró su máximo histórico.

Con más ingresos disponibles, las clases trabajadoras pudieron consumir más y en forma más variada. La evolución de los dos rubros básicos del presupuesto de las familias —la alimentación y la vivienda— constituye una prueba elocuente. Las estadísticas del consumo de carne, ese componente tan importante de la dieta de los argentinos, hablan por sí solas: en 1945 el salario medio de un peón industrial podía comprar 151 kilos de asado al año; en 1948, los kilos eran más de 310. A su vez, los gastos de vivienda se aliviaron con la prórroga del congelamiento de los alquileres y la prohibición de los desalojos decidida por la administración conservadora en 1943, una medida de gran impacto puesto que, de acuerdo con el censo de 1947, más del 70 por ciento de las viviendas del área metropolitana estaban ocupadas

por inquilinos. La reducción del costo de la canasta popular permitió disponer de más ingresos para otros gastos: mejoró la indumentaria y más hogares tuvieron acceso a los artefactos de uso doméstico que la industria producía en grandes cantidades. El presupuesto de las familias incluía, igualmente, más fondos para los gastos en recreación, como puso de manifiesto el aumento de los asistentes a las salas de cine y a los espectáculos deportivos.

La prosperidad de los años peronistas —solo quebrada en los momentos difíciles de mitad del período— sentó las bases de un Estado benefactor de proyecciones hasta entonces inéditas. Sus políticas abarcaron una gran variedad de frentes, desde el turismo social a la salud pública. Con el foco puesto sobre algunas de ellas, una conclusión emerge: el propósito de generalizar los atributos de una ciudadanía social tuvo, en definitiva, una suerte desigual. Prosperó en aquellos ámbitos en los que se trataba de llenar un déficit de larga data; tal el caso, como vimos, de las relaciones laborales. No ocurrió lo mismo donde preexistían instituciones con peso en el orden político creado por el peronismo: allí no pudo avanzar plenamente y debió acomodarse a la gravitación de las expectativas y los intereses creados.

Encontramos un ejemplo expresivo en el terreno de la previsión social. Comenzando en 1904 con la Caja de los empleados públicos, en los años sucesivos los beneficios de la jubilación se habían ido extendiendo con cuentagotas: en 1915, a los trabajadores ferroviarios; en 1921, al personal de los servicios públicos; en 1923, a los empleados bancarios; en 1939, a los periodistas y al personal de la Marina Mercante. El gran salto vino con el golpe militar de 1943; en ese año se creó la Caja de los empleados de comercio y —ya instalada la presidencia de Perón—, en 1946, la Caja del personal de la industria. Con la de los trabajadores rurales y la de los trabajadores autónomos en 1954, el sistema de previsión social cubría a la mayoría de la población económicamente activa. Ese mayor alcance no estuvo acompañado por un cambio en su estructura, pero no por que no se intentara. Hasta entonces, la protección a la vejez había evolucionado en función de los esfuerzos de las diversas categorías de trabajadores: cuando eran exitosos, se materializaban en un esquema jubilatorio sostenido por los trabajadores y los empleadores. Así, la extensión a una

nueva categoría de trabajadores daba lugar a la creación de un esquema adicional, con funcionamiento autónomo y beneficios diferenciados, puesto que dependían de los salarios, que, a su vez, variaban según los sectores de actividad. La primera tentativa de reforma se produjo en 1944. Consistió en la articulación de las distintas cajas de jubilados en un régimen unitario para coordinar su gestión y reducir la desigualdad de sus beneficios. La segunda y más audaz iniciativa ocurrió en 1946; su objetivo: hacer tabla rasa con los esquemas existentes y reemplazarlos por un seguro social universal, financiado con los aportes de trabajadores y empresarios, incrementados en forma progresiva a lo largo de la escala salarial. El obstáculo más importante lo pusieron los trabajadores afiliados a las distintas cajas, que se resistían a lo que entendían constituía una nivelación de los beneficios. Se trataba de una resistencia que el novel gobierno peronista prefirió no desafiar; más tarde, en 1953, una nueva legislación devolvió su autarquía a las cajas de jubilaciones. El resultado fue la mayor extensión de la red de seguridad social pero, al mismo tiempo, su fragmentación según el diferente poder de presión de los trabajadores en el mercado.

Una consecuencia análoga se observa en las vicisitudes de la política de salud pública. Antes de ocuparnos de ellas, destaquemos que en este campo la acción gubernamental tuvo una envergadura inédita, desde el primer ministerio del ramo en la historia de las agencias estatales del país. Para limitarnos a unos pocos indicadores: entre 1946 y 1954 se produjo un descenso en la tasa de mortalidad en todas las edades de la población; la infantil cayó de 80,1 por mil en 1943, a 70,4 en 1947 y 66,5 en 1953; a su vez, la esperanza de vida promedio de los argentinos aumentó de 61,7 años en 1947 a 65,5 en 1953. Estas cifras reflejan fuertes inversiones en la construcción de hospitales y puestos sanitarios, la duplicación de las camas disponibles por habitante, el incremento del número de médicos, las campañas masivas de erradicación de enfermedades endémicas, la extensión de la educación sanitaria en el conjunto de la población, que hizo de los certificados de vacunación un requisito indispensable para poder inscribirse en la escuela.

La gestión del peronismo en el campo de la salud quedó asociada a la figura del ministro Ramón Carrillo, quien procuró poner en práctica el enfoque sanitarista desarrollado en la década

precedente, centrado en el primado de la intervención estatal y su misión: articular la atención médica dispersa entre el hospital público, las asociaciones mutuales de las comunidades étnicas, las sociedades de beneficencia administradas por damas de la alta sociedad. Con ese objetivo, Carrillo propuso la creación de un sistema de salud de cobertura universal, integrado y gratuito, con aportes de empresarios, trabajadores y el propio Estado. Así concedida, la propuesta no alcanzó a levantar vuelo y debió subordinarse a las restricciones que le impuso la nueva configuración política del poder estatal. La primera provino de los trabajadores organizados. En 1944, el gremio más importante de la época, la Unión Ferroviaria, se presentó ante Perón —por entonces en busca del apoyo laboral— solicitando ayuda económica con el fin de hacer efectivo uno de sus proyectos más caros, un hospital para sus afiliados, síntoma inequívoco de la vitalidad de la tradición mutualista de los inmigrantes extranjeros. Esa ayuda le fue concedida, con un adicional: el aporte obligatorio de los trabajadores y de las empresas para su sostén. El ejemplo fue luego imitado por otros gremios; surgieron así las obras sociales sindicales y, con ellas, una fórmula de asistencia social a partir de criterios ocupacionales, cuyos resultados —una solidaridad tan heterogénea como la de las cajas de jubilaciones— conspiraban contra la propuesta de Carrillo. La segunda restricción, contra la que nada pudo hacer el Ministro de Salud, fue la Fundación Eva Perón, que absorbió las sociedades de beneficencia y, con total autonomía, ingentes recursos y una cuota nada desdeñable de discrecionalidad, dirigió su actividad a los sectores más humildes —los ancianos indigentes, los niños, las mujeres solteras—, para los cuales el impacto de las reformas laborales tenía una significación limitada. Estas iniciativas operaron como una rueda de auxilio del Estado benefactor montado por el peronismo que, como surge de los estudios de Susana Belmartino, consistía en un sistema con eje en la participación laboral y estratificado en sus beneficios por las diferencias de ingresos en la población asalariada.

En el ámbito de la educación, la gestión del peronismo recogió los frutos de una antigua acción pública. La incorporación a la enseñanza primaria prolongó la tendencia expansiva de comienzos del siglo y creció 3,3 por ciento anual entre 1946 y 1955. Esa tasa de crecimiento de la matrícula es superior a la de la población, lo que

sugiere que el acceso a los sectores de menores recursos, tanto en las zonas de la geografía nacional como en las zonas rurales, se duplicó en un período de diez años. La proporción de la matrícula primaria y secundaria pasó de 41,6 por ciento en 1946 a 83,2 por ciento en 1955, casi duplicando en ese período el nivel de escolaridad promedio anual de la población. La enseñanza técnica —fuera de las clases populares— se duplicó en el mismo período para el ascenso social.

Diez años de transformación transformaron la mentalidad sobre la migración, sobre la migración rural, sobre la migración urbana. Los cambios operados en los sectores populares nos iluminan retroscena sobre la parte del contingente de los entrevistados que no podían mirar a la expectativa de la experiencia de movilidad en los años siguientes. Esta vez, sin embargo, la repetición de la hazaña, ahorro, edu-

sugiere que el acceso a la enseñanza primaria se extendió a los sectores de menores ingresos, que había más escuelas y más maestros, tanto en las zonas centrales como en las regiones periféricas de la geografía nacional. Estos esfuerzos de escolarización se tradujeron en una disminución del analfabetismo, desde el 13,6 por ciento registrado en 1947 al 8,3, en 1960. Pero la novedad más significativa del período radicó en la evolución de la enseñanza secundaria. La proporción de los alumnos que terminaban la escuela primaria y se inscribían luego en los colegios secundarios subió de 41,6 por ciento en 1945 a 65 por ciento en 1955; la matrícula en el nivel medio, que venía creciendo desde 1930 a un promedio anual de 8,8 por ciento, llegó al 11,4 entre 1946 y 1955, casi duplicando en la década el número de estudiantes. Las modalidades que más aumentaron —la enseñanza comercial y la enseñanza técnica— fueron aquellas en las que predominaban los hijos de las clases asalariadas urbanas, hasta los que llegó la educación con su promesa siempre renovada de credenciales para el ascenso social.

## IV

Diez años de redistribución del ingreso y de políticas sociales transformaron la morfología de la sociedad argentina. La investigación sobre la movilidad social en el Gran Buenos Aires realizada por Gino Germani en 1960 ofrece una imagen de los cambios operados en los sectores más bajos. Dos datos en particular nos iluminan retrospectivamente. Para esa fecha, la mitad de los nacidos en hogares obreros ya no estaba en esa categoría: eran parte del contingente de nuevas clases medias. Y el 40 por ciento de los entrevistados había dejado de ser un trabajador sin oficio para ocupar una posición de obrero calificado mejor remunerado. Desde 1946 el país asistía, así, a una nueva edición de la experiencia de movilidad ascendente que había acompañado su trayectoria en los albores del siglo. En este marco, más argentinos podían mirar a los que estaban en un escalón social superior con la expectativa de alcanzarlos, ellos o sus hijos, en poco tiempo. Esta vez, sin embargo, lo que tenían por delante no era la simple repetición de la hoja de ruta de los inmigrantes ultramarinos: trabajo, ahorro, educación. La novedad radicaba en que el Estado se

sumaba a su esfuerzo, les allanaba el camino y removía obstáculos, ampliando las repercusiones de las transformaciones que se operaban en la economía y en la sociedad.

## V

El proceso de democratización del bienestar durante la década peronista puede ser sintetizado en una imagen: una familia típica tal como aparecía en forma recurrente en la propaganda oficial y en los libros de lectura de la escuela. En ella, el padre está sentando leyendo un diario o escuchando la radio, la madre se encuentra haciendo labores domésticas, y los hijos, ocupados en sus tareas escolares. La escena reúne rasgos característicos de la época. Allí está presente, en primer lugar, la mayor prosperidad, fruto del pleno empleo y los altos salarios, que hacían posible al jefe del hogar disfrutar de su tiempo libre al cabo de la jornada de trabajo. A pesar de las fluctuaciones registradas en el período, el incremento del poder adquisitivo de los salarios contribuyó a dar más seguridad a las familias. La proporción del gasto familiar que cubría el salario básico del trabajador industrial, 85 por ciento en 1943, se elevó en 1955 a casi 100 por ciento: el jefe del hogar estaba en condiciones de hacerse cargo, a partir de sus propios ingresos, de las necesidades de su familia. En esas circunstancias, más argentinos pudieron salir a buscar pareja y contraer matrimonio. La tasa de nupcialidad de 6,58 por mil habitantes en 1936-1940 se elevó a 7,38 en 1941-1945 y a 8,32 en 1946-1950. No solamente aumentó el número de matrimonios; también hombres y mujeres comenzaron a casarse más jóvenes.

Continuando con la descripción, en esa imagen se advierte, en segundo lugar, la confirmación del papel tradicional de la mujer como esposa y madre: no hay en este plano cambios apreciables. En parte, porque los mejores salarios de los jefes de familia permitían que la declinación de la participación femenina en el mercado de trabajo continuara su curso. El censo de 1947 registra su punto más bajo: solo una de cada cinco mujeres de 14 años y más contaba con una ocupación remunerada. Recién hacia el final del período, entrando en la década de 1960, su nivel de participación económica comenzó a crecer. Entre 1946 y 1955, en cambio, la mayoría de ellas seguía dando primacía a su lugar

como guardiana del hogar una carrera, y contaba con un logro de entonces por la ley del voto femenino de esa visión tradicional, manifestó sus más profundos deseos de un programa de acción, la publicidad tarjetaron al ama de casa de mensajes ponían el centro, la familia bien centrada en la mujer, emancipación femenina, estatus jurídico en la modificación de ma-

Finalmente, en los privilegiados, el grado era terminante, hijos que figuraban si no con el ideal de natalidad. Luchando una tendencia en 1914 había sido un proceso, res (donde era que en el inicio poco éxito de la natalidad, anticoncepción, las diferencias

Cabe pica. Corataba repescena, puesto bien, es de su medio en presente

como guardiana del hogar, en desmedro del trabajo pago o de una carrera, y contaba con las condiciones materiales para hacerlo. Un logro de entonces, el ejercicio de los derechos políticos por la ley del voto femenino de 1947, estuvo enmarcado dentro de esa visión tradicional: la ocasión para que la mujer pusiera de manifiesto sus más profundos valores morales antes que la elección de un programa político. En la ratificación de esa concepción, la publicidad también ejercía un papel: sea que se dirigieran al ama de casa de clase media o a la joven asalariada, los mensajes ponían el énfasis en ropas, cosméticos, artefactos domésticos, la familia bien alimentada y el marido feliz. Esta cultura centrada en la mujer en el hogar postergó cualquier atisbo de emancipación femenina y, en los hechos, la desigualdad de su estatus jurídico en el derecho laboral y el derecho civil no fue modificada de manera sustancial.

Finalmente, en la escena familiar tenemos a los niños, los únicos privilegiados que reconocía un gobierno cuyo objetivo declarado era terminar con los privilegios. Generalmente, son dos los hijos que figuran en compañía de sus padres y ello está en línea, si no con el ideal oficial, por lo menos con la trayectoria de la tasa de natalidad. La transición hacia la familia con pocos hijos era ya una tendencia incontrastable: el promedio de 5,3 hijos por mujer en 1914 había caído a 3,5 en 1947 para el conjunto del país; este era un proceso más urbano que rural y más visible en Buenos Aires (donde el promedio pasó de 3,4 a 1,5 entre los dos censos) que en el interior. Desde las esferas oficiales se procuraba —con poco éxito— revertir esa tendencia con medidas de promoción de la natalidad. Entre los grupos recién urbanizados, las prácticas anticonceptivas se difundían con rapidez, con lo que se acortaron las diferencias respecto de los sectores de más antigua radicación.

Cabe subrayar un último detalle en la imagen de la familia típica. Con frecuencia, en el epígrafe se destacaba que lo que allí estaba representado era una familia trabajadora. Comentando esta escena, Luis Alberto Romero señala que el modelo cultural propuesto para los trabajadores no era estrictamente proletario. Más bien, ese trabajador, sentado en un cómodo sillón en la sala de estar de su casa, con saco y corbata, leyendo el diario o escuchando la radio en compañía de su familia, se aproximaba bastante bien a la representación idealizada de las clases medias. Esto es, en definitiva,



interacción social no era empresa fácil. En primer lugar, por la velocidad con la que se producían los cambios y la diversidad de los planos en los que se manifestaban. Países más viejos habían pasado por transformaciones estructurales similares a las de la Argentina a medida que se intensificaba la industrialización. Pero allí, su traducción en el nivel de las instituciones, de los consumos, de la sociabilidad había sido más lenta, permitiendo una transición menos abrupta a la democracia de masas. Aquí, en cambio, ese proceso se comprimió en una década. El largo brazo del Estado hizo que todo sucediera a la vez y rápidamente: el incremento del número de los asalariados, la expansión del sindicalismo, la redistribución del ingreso y, en un nivel más profundo, el eclipse definitivo de la deferencia y el respeto que el orden social preexistente acostumbraba esperar de parte de los estratos más bajos. Por sus semejanzas, el escenario provocó un clima de desasosiego similar al experimentado por la elite dirigente de principios de siglo ante los efectos de la modernización del país y la presencia masiva de extranjeros. Ese clima había alimentado entonces reacciones xenófobas; no fueron muy distintas las que suscitó ahora.

En segundo lugar, otra de las dificultades para digerir las novedades residió en el tono desafiante con que eran introducidas. La política de inclusión del mundo del trabajo adquirió en el discurso peronista los contornos de una reparación histórica contra un orden social excluyente. Aunque el blanco de los ataques lo constituyeron las clases altas —esa omnipresente oligarquía de la tradición política nacional—, las clases medias más antiguas se sintieron igualmente implicadas: la flexibilidad con la que la sociedad argentina había terminado por asegurarles una posición expectable sirvió para enrolarlas también a ellas en la defensa de los equilibrios sociales y políticos cuestionados. La ciudad de Buenos Aires se convirtió, así, en el ámbito de un conflicto diferente al que tuvo lugar en el cinturón fabril; se trató de un conflicto cultural con eje en aquello que resume ejemplarmente cuánto tenía de irritante el cambio social en curso: la irrupción en la vida pública de los trabajadores venidos del interior, bien pronto conocidos como "cabecitas negras". Como sucede con los estereotipos que responden a una base étnica, el de los cabecitas negras tenía por función subrayar la diferencia, marcar la separación

entre "nosotros" y "los otros"; oponer, en fin, al proceso de integración en marcha un proceso inverso, de segregación. Que esa segregación tuviera solo una manifestación simbólica y se mostrara sutilmente en el trato cotidiano no la hacía por ello menos real: condensó en gestos y miradas los efectos inquietantes de la súbita ampliación de la comunidad política.

## VI

Los años peronistas implicaron para las clases trabajadoras una integración sin precedentes en el cuerpo social y político del país. Con respecto a la naturaleza de este proceso, señalemos que integración no equivale aquí a ausencia de conflicto; alude, más bien, a la pertenencia a una sociedad como ámbito de derechos y recursos accesibles en forma igualitaria a todos sus miembros. En este sentido, la experiencia política que concluyó abruptamente en 1955 continuó el proceso secular de integración social y política del país; en el pasado, sus protagonistas habían sido las clases medias formadas a partir de la inmigración europea, ahora lo eran las clases trabajadoras. La rapidez y el carácter abarcador de esta nueva fase del proceso tuvo una consecuencia. En el curso de una sola generación, arraigó en el mundo del trabajo ese subproducto ideológico que se conoce con el nombre de "expectativas crecientes", esto es, las expectativas de que mañana se tendrán más cosas que hoy y de que es inconcebible dejarse arrebatar el terreno ya conquistado. A partir de 1956, esa formidable premisa psicológica galvanizó el estado de movilización de los trabajadores por razones inmediatamente comprensibles. El proyecto ideal del golpe militar que derrocó al peronismo se propuso recortar la gravitación alcanzada por las clases trabajadoras en la vida económica y política con un doble objetivo: revertir la distribución del ingreso para reconstruir los beneficios de las empresas y alentar nuevas inversiones, y crear un orden político menos dependiente del sostén directo de los sectores populares.

Ese proyecto, que en su ambición tenía mucho en común con la restauración conservadora de 1930, fue más fácil de concebir que de llevar a la práctica en forma perdurable. Después de una década de crecimiento industrial y de democratización del bienestar, el retorno a los equilibrios sociales y políticos anteriores

a 1943 era una empresa difícilmente factible. Es verdad que los años peronistas no habían alterado en forma sustantiva las bases sobre las cuales la clase política conservadora de los años treinta había levantado la arquitectura económica del país: una industrialización liviana y complementaria para un país agroexportador. Pero al canalizar los fondos públicos y la protección estatal a la sustitución extensiva de las importaciones, contribuyeron a profundizar la diferenciación de la estructura económica y social. Junto con los propietarios rurales, las grandes empresas industriales y financieras y la antigua clase media comercial y burocrática, se fue consolidando un vasto mundo industrial volcado al mercado interno, débil en su poder económico, dependiente en su conformación productiva, pero con una fuerte influencia social debido a su incidencia en el empleo y en la economía urbana. En este panorama económico y social ahora más complejo, los terratenientes, los capitales más concentrados, los pequeños y medianos industriales, los obreros y los empleados —todos estos sectores— dieron lugar a un compacto nudo de intereses que se atrincheró detrás de sus organizaciones. Y desde allí ejercieron una presión directa sobre los poderes públicos. Ese fue el marco de una intensa y, a la vez, fluctuante puja distributiva. Si bien ninguno de esos sectores pudo por sí solo dar una dirección consistente al rumbo del país, cada uno de ellos contó con la capacidad para impedir que los demás lo hicieran. En esas condiciones, cobró forma el perfil de lo que se dio en llamar el empate social dentro del que se desarrolló la Argentina entre 1956 y 1975, con su corolario: el ciclo de avances y retrocesos de la economía, la inflación alta y persistente.

Correspondió al movimiento obrero —dentro de ese cambiante escenario— la vanguardia en la defensa del legado de los años peronistas. Contó para ello con dos importantes recursos. El primero, un mercado de trabajo relativamente equilibrado por la ausencia de una masa de campesinos pobres de magnitudes similares a las que encerraba el sector rural de otros países de América Latina. Más concretamente, la falta de esa presión demográfica a las puertas del mundo del trabajo urbano amplió el margen de maniobra de los sindicatos y permitió que los salarios se situaran a niveles altos en relación con la región. El segundo recurso fue la cohesión política de las bases obreras en torno a la identidad

peronista. En el sindicalismo argentino no existió la cesura que dividió a socialistas y comunistas en Francia o a demócratas cristianos, socialistas y comunistas en Italia; su contextura política se asemejó más a la maciza unidad de los sindicatos socialdemócratas de Gran Bretaña y Alemania. Este fue un recurso de singular relevancia, ya que el estatus semilegal del peronismo después de 1955 convirtió a las organizaciones gremiales en portavoces de las lealtades políticas de los trabajadores.

La eficacia de esos dos recursos para potenciar el poder de presión del sindicalismo fue reforzada, además, por las características de la escena social y política que emergió a la caída del peronismo. Frente a ese compacto movimiento levantado en defensa de las posiciones adquiridas en los diez años previos, no surgió un polo alternativo dotado de una parecida consistencia. La secuela de gobiernos, civiles y militares, sin respaldo social amplio ni unidad de propósitos y las divisiones dentro de las fuerzas empresarias se combinaron para crear el campo propicio: los trabajadores, desde sus organizaciones sindicales, se ocuparon de aprovecharlo, abriendo brechas entre sus adversarios para evitar los riesgos del aislamiento político y ser reconocidos como actores en su justo derecho, explotando, en fin, los vacíos de poder para obtener ventajas económicas y lograr influencia política en medio de los vaivenes de la vida pública del país. Sin duda, en esa empresa hubo más derrotas que triunfos, pero siempre una incesante y tenaz resistencia.

Esa resistencia se llevó a cabo desde los valores de la cultura política peronista: la conciliación de clases y el nacionalismo. Como tales, estos valores no implicaban un cuestionamiento de la estructura capitalista del país y certificaron, retrospectivamente, el impacto de la incorporación política y social de los trabajadores hecha por Perón. En América del Sur, el movimiento obrero argentino se distinguió por la escasa acogida que brindó a las ideologías de clase. La figura de un dirigente comunista al frente de un gran sindicato, familiar en Chile o en Uruguay, aquí fue toda una excepción, con frecuencia, pasajera. Ciertamente, la movilización de los trabajadores se impregnó más de una vez de un fuerte componente antagonista, pero este no llegó a plasmarse en una alternativa política duradera. Las lealtades peronistas opusieron una barrera infranqueable a su crecimiento y sustentaron.

en definitiva, la estrategia de negociación y compromiso con la que el liderazgo sindical administraba el poder de presión de los trabajadores organizados.

Los frutos de esa estrategia se hicieron visibles en primer lugar en el ámbito de las organizaciones gremiales. En 1957, el gobierno militar convocó a una asamblea, al final suspendida, para normalizar la CGT y de allí reemergió el peronismo convertido en la corriente mayoritaria del movimiento obrero. En 1958, la presidencia de Arturo Frondizi repuso la vigencia de la legislación sindical de 1945 y, con ella, el monopolio de la representación gremial; cuatro años después, los peronistas volvieron al control de la CGT. En 1970, la dictadura del general Juan Carlos Onganía sancionó la Ley de Obras Sociales, que extendió su cobertura al conjunto de la población asalariada y entregó la gestión de ese enorme patrimonio a los sindicatos. No sorprende que en el marco de un nuevo patrón de desarrollo, en el que ya no fue el consumo popular sino el de las clases medias y altas el elemento dinámico, la estrategia sindical fuese menos efectiva respecto de los ingresos del trabajo. En 1959, los salarios reales experimentaron una caída del 30 por ciento, que tardó unos diez años en revertirse. Pese a esa recuperación, la tendencia con la que venía creciendo la participación de los salarios en la distribución del ingreso cambió claramente de signo: pasó de casi la mitad, registrada a principios de los años cincuenta, a poco más de un tercio a fines de los sesenta, para luego aumentar, pero todavía lejos del nivel alcanzado en los tiempos de la posguerra.

Para los observadores de la época, hacia mediados de la década de 1960, el laborioso ajuste entre la herencia del peronismo y el sistema político y económico surgido de su derrocamiento estaba encaminándose a un punto de llegada. Que se trataba de un punto inestable lo probaban las trabas a las libertades políticas y los altos índices de inflación. No obstante, si esa hipótesis de futuro parecía verosímil era porque descansaba en un dato a la vista de todos: la fuerza social más expresiva de aquella herencia, el movimiento obrero, había conseguido, por medio de sus dirigentes, convertirse en interlocutor de los factores de poder de la Argentina posperonista y participaba con el Ejército y las elites económicas del juego corporativo que se desenvolvía entre los bastidores de la precaria democracia existente.

## ARGENTINA 1910-2010

Por la crónica de la historia conocemos que ese punto de llegada fue de corta duración. En 1966, un nuevo golpe militar instaló en su lugar un régimen autoritario que se propuso avanzar, libre de condicionamientos, en la reorganización de la economía y de la sociedad construida en los años peronistas. En ese intento —desde el Cordobazo de 1969— conmovió sus cimientos. Y finalmente condujo a Perón de nuevo al poder, después de dieciocho años de exilio. Este giro inesperado en la secuencia de desarrollos que pautaban la marcha del país tuvo, a su turno, un desenlace catastrófico: el carisma del viejo caudillo se mostró impotente para encauzar las expectativas y pasiones acumuladas durante su larga ausencia. En esta mirada del país se mostró imparable un protagonista principal de esos tiempos violentos, los jóvenes de las clases medias.

## VII

Para trazar el itinerario que los llevó al centro de la escena hay que ampliar la óptica de los años posteriores a 1955 y destacar que, en paralelo con los avatares de la puja distributiva, se produjo un vasto proceso de modernización social y cultural. Su epicentro estuvo radicado en las clases medias, que continuaron ampliando sus fronteras dentro de la estructura social. Según los cálculos de Susana Torrado, las ocupaciones que correspondían a este heterogéneo estrato dentro de la población activa pasaron de 40,6 por ciento en 1947 a 42,7 en 1960 y se ubicaron en casi 45 por ciento en 1970. Un hecho llamativo en esta expansión: las posiciones que más crecieron fueron aquellas asociadas a una mayor calificación, los profesionales y los técnicos, confirmando la fuerza de la única creencia que los argentinos compartían por igual; el papel de la educación en el progreso personal. Las estadísticas de escolarización eran otra prueba elocuente. Los 480.000 estudiantes matriculados en la enseñanza secundaria en 1955 se multiplicaron por dos y llegaron al millón en 1970. Algo similar se observó en la enseñanza universitaria: mientras en 1955 había 138.000 estudiantes matriculados, en 1965 su número era 206.000 y en 1970 alcanzaron los 390.000, cuando el

veinte por ciento de los jóvenes de entre 20 y 24 años cursaba estudios superiores. La explosión educativa fue acompañada por un mayor acceso a los nuevos iconos de la modernidad: el automóvil y la televisión. En 1960 había 42 autos por mil habitantes; diez años después eran 94,7. La difusión de los aparatos de TV fue aun más rápida: en solo cinco años, entre 1965 y 1970, pasaron de 72 por mil habitantes a 146. El *boom* de la construcción de la década de 1960 —la proliferación de los edificios de departamentos, con sus infaltables cuartos de servicio— formó parte, asimismo, de los consumos y estilos de vida al alcance de las clases medias por el impulso de una economía que —entre ajustes y ajustes y con un perfil de ingresos más desigual— creció durante diez años consecutivos desde 1964.

Si la modernización social retomó, en rigor, una trayectoria que venía de lejos, las transformaciones en la cultura y las costumbres se produjeron a un ritmo que superó con creces aquel al cual estaba habituado el país. El clima de apertura intelectual e institucional, tras la caída del peronismo, coincidió con un período de grandes cambios culturales y morales en el mundo. Abiertas las compuertas, un público ávido se lanzó a hacer suyas las novedades de los *sixties*; surgió, así, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, un vigoroso movimiento cultural en el que coexistieron el experimentalismo artístico, el revisionismo ideológico, la puesta al día del saber y los conocimientos, y la crítica de la familia tradicional y la moral sexual. Este movimiento irradió su influencia desde nuevos semanarios de actualidad, la Universidad —otra vez autónoma, luego de la noche peronista—, centros privados y, en una flexión muy argentina, desde una de las comunidades de psicoanalizados más grande en el mundo. De esta variedad de dimensiones que ponían en cuestión valores y prácticas establecidas, nos interesan los cambios en la brecha cultural entre generaciones: fue en esos años, y en sintonía con las tendencias internacionales, que se recortó el contorno de un nuevo estrato: la juventud.

Hasta entonces había jóvenes, pero no juventud, esto es, “los veinte años” eran, sobre todo, una categoría biológica y no el lugar de un grupo con una entidad diferenciada. Los jóvenes se vestían como los adultos: en los varones, el rito de pasaje de la adolescencia a la juventud se cumplía en el momento de ponerse los

pantalones largos. También escuchaban y bailaban, con las modas propias de su edad, una música que era de los adultos. Como se desprende del análisis de Valeria Manzano, esto es lo que cambió hacia el final de los años cincuenta por el desembarco en el país de los vaqueros o *blue-jeans*: ellos fueron los signos visibles de la pertenencia a un estadio vital y cultural particular. Ni niños ni adultos, quienes los usaban eran jóvenes y se mostraban como tales. La segunda fue el *rock*, convertido en otra señal de identidad. Las empresas discográficas locales entrevistaron el potencial de este nuevo mercado e inundaron las radios y la TV de émulos de Elvis Presley, cuya popularidad le dio a la cultura de masas un ostensible aire juvenil.

La nueva generación nació y dio sus primeros pasos al calor del espíritu iconoclasta que campeaba en el clima cultural y moral de entonces. En él encontró las claves para su emancipación psicológica y social. Como era esperable, no todos los jóvenes corrieron ese camino de la misma manera, pero todos estuvieron expuestos a él. En el terreno de la moral sexual, fue creciente la aceptación de las relaciones prematrimoniales, esto es, el fin del doble estándar por el cual se requería virginidad a las mujeres mientras se permitían las experiencias sexuales a los varones. Las jóvenes, en particular, comenzaron a frecuentar círculos de sociabilidad mixtos sin la supervisión de algún adulto y en una liberación de mayor igualdad. Por su parte, la tutela de los padres, el mandato familiar, perdieron su fuerza de antaño; la búsqueda en las filas de la nueva generación. En los años sesenta la presencia pública de la juventud tuvo, a su vez, dos caras. Por un lado, la cultura del *rock*, con su cuestionamiento de los valores e instituciones tradicionales en nombre de la autenticidad y la libertad individual. Por el otro, la radicalización de los estudiantes universitarios por el auge de las ideologías de izquierda y la influencia de la Revolución Cubana.

En una perspectiva comparada, tanto la revuelta moral como la rebelión ideológica tenían mucho en común con experiencias similares de los jóvenes en América Latina. Colocadas en el marco de la historia larga de la Argentina, la emergencia y la movilización de los jóvenes cobran, en cambio, un relieve específico: podrían

ser vistas como un nuevo *shock* demográfico y cultural que, como otros en el pasado, puso en tensión el cuerpo social y político del país. Considerado desde este ángulo, su desarrollo posterior en los años setenta, que sabemos trágico, no fue independiente de las reacciones que suscitó. Estas comenzaron desde los bolsones de conservadurismo existentes dentro de las propias clases medias, las ligas de padres y madres católicos, los oficiales del Ejército. Promotores de una campaña contra las costumbres más liberales, el pelo largo, las ropas de los jóvenes, le imprimieron un sesgo disruptivo a comportamientos que no lo hubieran tenido en un contexto más permisivo. El cierre de la escena política por el golpe de 1966 fue una decisión crucial en la cadena de reacciones y contrarreacciones. Hasta allí la protesta juvenil, desde las bandas de *rock* a los centros estudiantiles, se había desarrollado con independencia de la expresión de masas de la disidencia social y política: los trabajadores y el peronismo. Como lo mostraron las calles de Córdoba en mayo de 1969, esa distancia prometía acortarse e hizo surgir y nutrió "el movimiento hacia el pueblo". Con las armas que pusieron en sus manos el ejemplo del "Che" Guevara, los curas del Tercer Mundo, la bendición de Perón, la benevolencia de muchos de sus contemporáneos, los jóvenes de las clases medias caminaron con paso firme, en medio de la agudización de los conflictos sociales, hacia el acto final —el terrorismo de Estado— que clausuró los efectos de la vertiginosa modernización cultural y moral de la sociedad argentina.

### TERCERA PARTE

#### *EL ECLIPSE DE LA EXCEPCIÓN ARGENTINA*

En la última parte de este ensayo arribamos al período que se inicia a mediados de la década de 1970 y se extiende hasta los años más recientes. Las líneas que siguen tendrán entonces un carácter más impresionista y también más sintético. A falta de la perspectiva que brinda el paso del tiempo, nos limitaremos a identificar rasgos principales de los cambios sociales del período. El primero de ellos se resume en una constatación, el debilitamiento de un

eje central del desenvolvimiento de la sociedad a lo largo del siglo XX: aquel basado en su capacidad para incorporar a sucesivos contingentes de población al trabajo, la educación, el bienestar, ofreciendo oportunidades de progreso personal y colectivo. Parece innecesario aclarar que esa inclusión social no fue eficaz para todos y todo el tiempo. Y que, además, sus alcances dependieron del tesón de los individuos y sus familias y de la solidez de su acción conjunta. El resultado del proceso de la masiva inmigración europea y de las no menos masivas migraciones internas fue la formación de una mentalidad fuertemente influida por la experiencia de muchas décadas en las que nuevas generaciones estuvieron mejor que las anteriores o, por lo menos, aspiraron a estarlo. La brecha entre las expectativas y los logros efectivos se abrió más de una vez en el transcurso de la accidentada historia del país, pero el mito movilizador de la igualdad de oportunidades fortaleció las resistencias y repuso la búsqueda de más equidad en el acceso a los recursos y derechos.

Con estas premisas, dirijamos la atención al período de la gran transformación de la morfología y la dinámica de la sociedad argentina. Conocemos su fuerza propulsora: la teoría y la práctica del neoliberalismo. Conocemos, asimismo, su mayor impacto: la incorporación de vastos sectores sociales. Pero también sabemos que los cambios no siguieron una secuencia lineal y exenta de conflictos. Sobre ellos gravitó la reacción de las aspiraciones y los intereses afectados que, si no modificó el rumbo, introdujo correcciones y enmiendas. En los últimos años hemos observado incluso una reversión parcial de las reformas y la vuelta del proteccionismo distributivo.

Retomemos el hilo de los acontecimientos al momento de la crisis de 1975. Los veinte años previos habían tenido por telón de fondo una puja distributiva sin ganadores ni perdedores netos y definitivos. La convulsión social y política que siguió a la muerte de Perón abrió el cauce a una dinámica económica turbulenta que se prolongaría por una década y media, primero en dictadura, después en democracia. Sus signos distintivos fueron una enorme deuda externa y una inflación superior al cien por ciento año tras año. Prestemos atención a estos signos: si ellos estuvieron allí fue porque no se logró crear un orden nuevo, incontestado y perdurable. La dictadura instalada en 1976 produjo una formidable concentración del poder económico e ingentes costos sociales

pero no fue la arquitectura de funcionamiento creado Adolfo Cantr disciplina sobre las tiva, se revelaría pro destina— de los pe blegada y su image inflación. El retorno ñado de una dobl dos gobernantes: flicto distributivo fuerzas intactas de los trece paros ge

La hiperinflación democracia pudo n perencia del cao les y despejó el apertura de la e bra de la hiperi pues, recién en cepción argen de Maristella S más allá de las de poder econ homogénea y progreso soci las reformas c más desigual perfil diferen

El proce ciedad se puesto de o su principa por Perón Latina, ot similares

pero no fue la arquitecta de una reforma irreversible del modo de funcionamiento de la economía y la sociedad. Como ha mostrado Adolfo Canitrot, los militares en el poder impusieron una disciplina sobre las fuerzas económicas y sociales que, en definitiva, se revelaría provisoria: la reacción —sorda, casi siempre clandestina— de los perdedores no consiguió ser completamente doblegada y su imagen en espejo fue el fracaso en poner freno a la inflación. El retorno de la democracia en 1983 vino, así, acompañado de una doble y amarga sorpresa para los nuevos e ilusionados gobernantes: la presión de los acreedores externos y el conflicto distributivo de los años sesenta, ahora exasperado y con sus fuerzas intactas después del interregno militar, como lo probarían los trece paros generales organizados por los sindicatos.

La hiperinflación con que terminó el primer gobierno de la democracia pudo más que el poder de la espada: la sensación y la experiencia del caos desarmó el amplio arco de las resistencias sociales y despejó el paso a un acelerado proceso de privatizaciones, apertura de la economía, desregulación de los mercados. A la sombra de la hiperinflación se cerró una historia y se abrió otra. Fue, pues, recién en la década de 1990 que asistimos al eclipse de la excepción argentina en el contexto de América Latina. Con palabras de Maristella Svampa, esa excepción consistió en una sociedad que, más allá de las diferencias entre las regiones del país y de los núcleos de poder económico existentes, se había caracterizado por ser más homogénea y más igualitaria, y por un extendido consenso en el progreso social para todos. La gran transformación provocada por las reformas de mercado y sus consecuencias —más fragmentación, más desigualdad, poblaciones marginales— fue desdibujando el perfil diferencial que tenía la Argentina en el continente.

## I

El proceso de reformas que fue dejando atrás un modelo de sociedad se distinguió por una verdadera ironía histórica. En el puesto de comando estuvo el que había sido durante la posguerra su principal artífice, el peronismo. El viraje del movimiento creado por Perón fue también una experiencia de época. En América Latina, otros movimientos de signo parecido vivieron episodios similares en el marco de ese giro abrupto de la capacidad de

decisión económica de los países provocado por la crisis de la deuda externa.

Cuando se observa más de cerca el trámite de las reformas, surgen, no obstante, las peculiaridades que le imprimió la gestión en manos del peronismo. Como señalamos, la tolerancia social inducida por la hiperinflación facilitó el nuevo curso. Pero, en medio de la emergencia, el gobierno buscó y encontró el margen de maniobra para graduar sus alcances con el objetivo de darle un sustento menos contingente. Para ello prestó atención a los intereses de grupos y sectores que podían ser perjudicados por las reformas y cuya reacción hostil entrañaba un riesgo potencial: las grandes empresas nacionales, crecidas al abrigo de la protección y los subsidios públicos, las organizaciones sindicales con su legislación garantista y sus obras sociales, los aparatos clientelares del peronismo en las provincias.

Cobró forma, entonces, un complejo juego de negociaciones. Las pérdidas que las reformas imponían a estos actores en algunas áreas fueron compensadas con retribuciones en otras. El resultado: desregulación parcial de mercados, apertura comercial con excepciones, sustitución de subsidios por mayor control sobre el sector de actividad, venta de empresas estatales con compradores escogidos, recortes selectivos del empleo público sin tocar las reparticiones de provincia. En el terreno de las relaciones laborales, mayor flexibilidad y precariedad en los contratos de trabajo, mientras los sindicatos conseguían bloquear el ingreso de empresas privadas al negocio de las obras sociales y los intentos por descentralizar las negociaciones colectivas. Esta política de compensaciones, al neutralizar a los perdedores más poderosos, jugó un papel central en la puesta en marcha de las reformas. Como ha señalado Sebastián Etchemendy, las reformas pudieron ajustarse al libreto neoliberal y avanzar en algunas áreas porque fueron negociadas e incompletas en otras. Las líneas de corte se dieron, a su vez, dentro de grupos más que entre grupos. Ciertos sectores empresarios y del mundo del trabajo pudieron defender mejor sus intereses; otras fracciones de las mismas fuerzas opusieron una resistencia que no alteró la marcha del proceso de cambio y su desenlace: un orden económico construido a partir de la mezcla de nuevas y viejas reglas de juego.

El control de la inflación con el esquema de la convertibilidad —una fórmula cuya rigidez estuvo a la medida de los reiterados fracasos del pasado— completó el nuevo curso y lubricó el efecto de las reformas de mercado. La coyuntura externa favorable, con el flujo de capitales, hizo también su contribución. En un contexto más estable, la economía volvió a crecer. Primero lo hizo con mucha fuerza, después con menos, hasta que la tozuda adhesión a la fórmula que había superado el caos hiperinflacionario complicó el ajuste al cambio de los vientos del mundo y sobrevino la dura recesión. Fueron diez años, hasta la crisis del 2001, durante los cuales la sociedad argentina tal como la conocíamos se volvió irreconocible. No vamos a acompañar aquí el trayecto de este proceso de cambio; exploraremos algunas pistas —solo algunas— de la gran transformación con el foco sobre las clases medias y las clases trabajadoras. Ellas nos ofrecen el ángulo adecuado para poder apreciar los rasgos propios de la experiencia del país en los tiempos contemporáneos de la globalización.

## II

Para decirlo con palabras conocidas: la globalización —y las reformas de mercado que ella promueve bajo el emblema del neoliberalismo—, por un lado, es un riesgo, porque avanza y destruye prácticas e instituciones de largo arraigo; por el otro, es una oportunidad, porque alienta y crea nuevas formas de inserción. El impacto de uno y otro de estos efectos depende de la contextura económica y social de los países. Las consecuencias de la desregulación de las relaciones de trabajo, con la introducción de contratos más precarios, son un ejemplo. En países donde existe una gran masa no incorporada al mercado de trabajo, estos contratos son una posibilidad de inserción que de otro modo sería más difícil. En cambio, en países donde la mayoría de los trabajadores está incorporada y disfruta de la protección laboral, estos contratos comportan un retroceso. El punto que nos interesa destacar por medio de este ejemplo es el siguiente: si los años de la globalización están asociados en la Argentina a la imagen de un paisaje social que se destruye es porque había mucho por destruir: las garantías y protecciones de esa sociedad más incluyente que hemos visto emerger y con-

solidarse en el tiempo a golpes de prosperidad y de acción del Estado.

Utilizando el coeficiente de Gini, que mide la distancia entre ricos y pobres, la evolución del país mostró un deterioro crecien- te: el 0,45 de 1988 saltó a 0,50 en 1999. Esa mayor desigual- dad abrió grietas profundas dentro de los estratos sociales. En las clases medias surgió un sector para el que se reservó el nombre de "nuevos pobres". Empleados públicos, maestros, pequeños y medianos empresarios, jubilados, cuentapropistas, que experi- mentaron un descenso en sus condiciones de vida en el contexto de las novedades: el encarecimiento de los servicios básicos por obra de las privatizaciones, la arrolladora apertura a las importa- ciones, la falta, en fin, de recursos para competir en un medio ambiente más áspero y con menos seguridades. Como lo mues- tran los trabajos de Alberto Minujin, Gabriel Kessler y Mercedes Di Virgilio, en "los nuevos pobres" convergieron situaciones muy diversas, así como fueron diferentes las formas con que trataron de sobrellevar la experiencia del empobrecimiento. Todos vieron borronearse creencias y expectativas en las que se habían formado: ser de clase media era un estatus social prestigioso en el que el bie- nestar material estaba asegurado y el futuro solo prometía una mejor vida.

En el otro extremo del universo heterogéneo de las clases medias se situaron sectores ubicados con éxito en la nueva eco- nomía de servicios y producción que floreció con las reformas de mercado. Típicamente, profesionales, gerentes, altos empleados de las finanzas, nuevos empresarios de los medios de comunica- ción y de la agricultura moderna. Para ellos, la década de 1990 fue la plataforma del ascenso social. Y, desde ella, la oportunidad de profundizar estilos de consumo en auge desde hacía años, como el abandono de la escuela pública en favor de colegios pri- vados y la atención de la salud por medio de la medicina pre- paga. La nueva vuelta de tuerca en la tendencia a diferenciar los consumos fue la expansión de barrios privados y *countries* en la periferia de las grandes ciudades; los ámbitos de una sociabilidad más exclusiva que eran ya familiares en Brasil y México, países más desiguales.

En las clases trabajadoras, varios procesos se combinaron para producir también una mayor fragmentación. El legado de los

años peronistas fue la amplia cobertura del mercado de trabajo formal, con garantías al empleo y protección social. La introducción de modalidades más flexibles de contrato de trabajo, mencionada antes, modificó ese estado de cosas. Las fronteras del mercado de trabajo formal se encogieron y dentro de ellas solo quedó la mitad de la fuerza de trabajo. La otra mitad fue confinada a condiciones más precarias, mayor inestabilidad y carencia de beneficios sociales. Podría decirse que la situación del mundo del trabajo retrocedió a los años veinte y treinta, cuando la heterogeneidad normativa en las relaciones laborales era la regla. Los rasgos inéditos del desempleo elevaron, a su vez, más barreras dentro de las filas de las clases trabajadoras. Durante buena parte de la década de 1990 tuvo lugar una experiencia novedosa en el país: crecimiento de la economía con pérdida de puestos de trabajo. La privatización de las empresas públicas, con la reducción de sus abultados contingentes de asalariados, la desaparición de un gran número de empresas industriales y la rápida modernización de otras para adaptarse al medio ambiente más competitivo dejaron fuera del mercado laboral a grandes contingentes de trabajadores.

El desempleo, un 6 por ciento en 1990, aumentó al 13 en 1994, un año de crecimiento. Más tarde, las fluctuaciones de la economía hacia un menor crecimiento y recesión impulsaron el desempleo a mayores tasas. El dato a retener es, el de 1994, porque pone de manifiesto que sectores de clases trabajadoras pudieron participar del nuevo contexto de crecimiento con reformas de mercado y otros, en cambio, quedaron fuera de él. La exclusión adquirió magnitudes todavía mayores —desconocidas en la Argentina— por la formación de poblaciones marginales, con débiles o nulos lazos en la economía, viviendo en una pobreza extrema y persistente en villas de emergencia, como las del segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires y el Gran Rosario.

Pocos países como la Argentina ilustraron tan bien en América Latina el costado negativo de las políticas de la globalización. De ser el país de las clases medias prósperas y de las clases trabajadoras organizadas pasó a ser el país de la declinación de una parte de sus clases medias y del surgimiento de bolsones de marginalidad en sus grandes centros urbanos.

Para finalizar este recorrido, veamos los tiempos más cercanos. Después del colapso de 2002, con el giro de las políticas económicas por un nuevo gobierno peronista y la coyuntura externa favorable, los indicadores sociales han mostrado una evolución positiva en el desempleo, los salarios, los niveles de pobreza. Juzgado en términos distributivos, el cambio ha sido menos claro. El máximo histórico del coeficiente de Gini, 0,54 en 2002, se ubica, en la última medición confiable, hacia 2006, en 0,48, un valor idéntico al de 1997. El coeficiente registrado en 1974, las vísperas de la gran transformación, 0,34, es un espejismo lejano. No obstante, la demanda de inclusión mantiene su vigencia de siempre; hoy la vemos encarnada con vigor en otra de las peculiaridades argentinas: la movilización social de los desocupados, que no tiene contrapartida alguna en otros países de la región.

A lo largo de este ensayo, hemos seguido el itinerario de las preguntas —y sus respuestas— en torno a las que se vertebró la sociedad argentina en el siglo XX: qué hacer con los inmigrantes europeos, qué hacer con los trabajadores, qué hacer con los jóvenes. La pregunta con la que se abre el nuevo centenario es qué hacer con los pobres.

#### BIBLIOGRAFÍA

- Canitrot, Adolfo, "Programas de ajuste y estrategias políticas: las experiencias recientes de la Argentina y Bolivia. Un comentario", en *Desarrollo Económico* N° 121, vol. 31, 1991.
- Cruces, Guillermo y Gasparini, Leonardo, "Desigualdad en Argentina. Una revisión de la evidencia empírica", en *Desarrollo Económico* N° 192, vol. 48, 2009.
- Del Campo, Hugo, *Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
- Devoto, Fernando, *Historia de la inmigración en la Argentina*, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
- Devoto, Fernando, "Para una historia de la Argentina en el siglo XX", en del Alcázar, Joan y Maitalía, Sonia (coord.), *América*

- Latina. Literatura e historia entre dos finales de siglo*, Valencia, Ediciones del CEPS, 2001.
- Etchemendy, Sebastián, "Construir coaliciones reformistas: la política de las compensaciones en el camino argentino hacia la liberalización económica", en *Desarrollo Económico*, N° 160, vol. 40, 2001.
- Gallo, Ezequiel, "Política y sociedad en Argentina, 1870-1916", en AA. VV. *Historia de la Argentina*, Crítica, Barcelona, 2001.
- Germani, Gino, *Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas*, Buenos Aires, Paidós, 1962.
- Halperin Donghi, Tulio, *Argentina. La democracia de masas*, Buenos Aires, Paidós, 1983.
- Kessler, Gabriel y Di Virgilio, María Mercedes, "La nueva pobreza urbana: dinámica global, regional y argentina en las últimas dos décadas", *Revista CEPAL*, N° 95, 2008.
- Losada, Leandro, *La alta sociedad en la Buenos Aires de la Belle Époque*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.
- Manzano, Valeria, "The Making of Youth in Argentina. Culture, Politics and Sexuality, 1956-1976", Ph. D. Dissertation, Bloomington, Universidad de Indiana, 2009.
- Minujin, Alberto y Kessler, Gabriel, *La nueva pobreza en la Argentina*, Buenos Aires, Planeta, 1995.
- Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Fondo de Cultura Económica, 2001, 2ª ed.
- Svampa, Maristella, *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*, Buenos Aires, Taurus, 2005.
- Torrado, Susana, *Estructura social de la Argentina. 1945-1983*, Buenos Aires, Solar, 1986.
- Torrado, Susana (comp.), *Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX*, Buenos Aires, Edhasa, 2007.
- Torre, Juan Carlos y Pastoriza, Elisa, "La democratización del bienestar", en Torre, Juan Carlos (dir.), *Los años peronistas (1943-1955)*, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.